

# LOS NUEVOS AGRICULTORES

Este artículo de Víctor Pérez Díaz está basado en una investigación, promovida por la Fundación FIES, sobre medianos y grandes agricultores de seis paisajes agrarios españoles: Cuenca del Duero, Rioja/Navarra, Lérida, Levante, Almería y Baja Andalucía; representativos de agriculturas con un alto grado de dinamismo. El autor analiza aquí los complejos procesos de cambio y los problemas actuales de esos agricultores, cuya historia económica anterior ha sido, en buena medida, coronada por el éxito. Pero ahora han de ajustar sus producciones, reducir sus costes y orientarse entre crecientes incertidumbres. En tales circunstancias, estos agricultores reaccionan por varias vías: desarrollan su potencial asociativo, se orientan hacia una economía corporatista, afirman una identidad social de carácter profesional, elaboran una estrategia de demandas de paridad de *status* y diversifican sus apoyos a la clase política.

## I. LOS PROBLEMAS

### 1. La gran transformación

**E**N los últimos veinte años ha ocurrido el proceso de «gran transformación» (1) por el cual España se ha convertido en una sociedad moderna con una economía de mercado o capitalista avanzada, y un sistema político de democracia liberal. La agricultura y los agricultores han sufrido las mutaciones correspondientes, como piezas de este proceso general. Se trata ahora de hacer balance, discutir sus problemas presentes, y anticipar algunos escenarios probables de su futuro.

En poco menos de una generación, agricultores y vidas rurales han experimentado un cambio radical. Mayor incluso que el sucedido en el curso de siglos anteriores. Los procesos de desamortización de tierras, supresión

de diezmos y señoríos, necesitaron entre sesenta y cien años para producirse. Desmantelaron la estructura estamental del antiguo régimen, diseñaron un mapa de la propiedad para varias generaciones, y probablemente expandieron la oferta agraria; aunque apenas alteraron el cuadro de la tecnología o el desarrollo de los mercados agrarios. La era de los ferrocarriles alteró estos mercados y, en poco más de veinte o treinta años, impuso el mapa de cultivos que más o menos llega a nuestros días. Los procesos de movilización agraria, de signo conservador en la meseta norte, y de signo anarquista en la España meridional (con una breve, pero quizá decisiva, contribución socialista a última hora), durante el primer tercio de este siglo, crearon el escenario de tensiones políticas y culturales que desembocaron en la guerra civil.

Los cambios en la estructura de la propiedad y el poder local en

la primera mitad del diecinueve, de los transportes y los mercados en su último tercio, de la cultura política en el primer tercio del siglo veinte: todos ellos no alteraron el carácter tradicional o pre-capitalista de la agricultura española de todo el período. Cabe caracterizarla precisamente así, no porque no hubiera estado sometida a procesos de innovación y cambio; ni porque no hubiera tenido un grado importante de conexión con, y dependencia del, mercado: casi todas las economías campesinas llamadas tradicionales, en las sociedades europeas o asiáticas, han estado sometidas a procesos de cambio permanente y han tenido estas conexiones con el mercado y el mundo exterior, habiendo sido sólo excepcional o marginalmente economías de subsistencia. El problema es de grado. Más allá de un punto, se introduce una tecnología que hace de la explotación algo totalmente dependiente de un mercado de tractores, carburantes, fertilizantes, piensos o semillas. Más allá de ese punto, el labrador produce todo o casi todo para el mercado; el autoconsumo familiar y el reemplazo se convierten en fenómenos relativamente marginales; el ritmo de introducción de novedades (tecnologías, variedades, especies animales, nuevos cultivos) se acelera sustancialmente.

Ese punto de inflexión no se consigue para el conjunto de la agricultura española hasta los años sesenta de este siglo, aproximadamente (2). Cuando se alcanza, la agricultura entra en una fase acelerada de transformación, pierde más de la mitad de sus efectivos, se puebla de máquinas, altera sus producciones, cambia sus pueblos y sus hábitos. Se convierte en «moderna» o «capitalista». Los agricultores de hoy



han protagonizado y experimentado en sí mismos esta mutación. Una vez realizada, sin embargo, deben enfrentarse con los problemas propios de los agricultores modernos: de control de costes, de dimensiones de explotación, de regulación de mercados (tanto de productos, como de factores de producción).

Lo que en el marco de la cultura occidental entendemos por sociedad moderna constituye una combinación de economía de mercado (o capitalismo) y democracia liberal. Pues bien, sucede que estos agricultores se han encontrado casi al tiempo con una economía agraria capitalista y un nuevo régimen político: una democracia liberal. Ese régimen marca desde ahora las nuevas reglas del juego de la acción colectiva, la política agraria y los intercambios (de demanda y apoyo) entre la clase labradora y la clase política.

## 2. Los grandes logros y los grandes problemas

En términos agregados, la agricultura española crece y se capitaliza de forma vertiginosa en los últimos veinte años. Apenas cambia la extensión de la superficie cultivada; pero triplica sus riegos (hasta llegar a c. 2,7 millones de hectáreas en 1977). Produce mucho más en términos reales, y el ritmo de crecimiento de su producción final agraria es mayor que el de todos los países europeos (si atribuimos un índice 100 a 1969/71, en 1977 España tuvo un índice 127, Francia 109, Italia 104). Lo produce con mucho menos población, que desciende de 4,8 millones de personas a dos millones entre 1960 y 1982. Lo

produce con un parque de maquinaria cuya potencia se multiplica por diez entre 1960 y 1977. La nueva agricultura española produce para una demanda doméstica y exterior (sobre todo europea) en franca expansión (3).

Esta experiencia es la de una adaptación, con éxito, a las nuevas circunstancias. Es, también, la respuesta a dos retos, que operan como principales factores causales de la transformación: el éxodo rural, que altera la estructura de precios de los factores de producción del medio agrario, y la expansión de la demanda. Uno y otro tienen su raíz en el proceso de crecimiento económico de España, y Europa Occidental, de los cincuenta y los sesenta. Pero estos factores causales no operan por sí solos. Requieren el concurso de una política económica que permita el establecimiento de un nexo entre nuestra economía y la europea desde 1959/61. Y requieren el concurso, crucial, de unos agricultores capaces de adaptarse a la situación. El proceso, por tanto, no es automático.

Los agricultores han demostrado una capacidad de adaptación extraordinaria. Ya en los primeros años sesenta podía observarse su arraigo en la tierra, su profesión, su comunidad. Incluso en épocas y zonas de gran éxodo, donde obreros agrícolas, ayudas familiares y población de servicios emigraban masivamente, eran raros los agricultores emigrantes (4). Pero una voluntad de arraigo no basta. Los comentaristas observaban con preocupación mentalidades tradicionales y debilidades de hábitos asociativos. A la hora de la verdad, sin embargo, se estableció un compromiso entre tradición y novedad que, con más o menos fricciones, permitió cambios espectaculares continuos, y

el «particularismo familiar» (5) se reveló compatible con la experimentación en formas asociativas y, en general, el desarrollo de un potencial asociativo importante. Los agricultores no se limitaron a secundar a la autoridad pública, sino que fueron mucho más allá, en riegos, a veces en cultivos y especies, aunque su inhibición fuera mayor en el terreno de la comercialización y de la transformación agraria.

Estos agricultores lo fueron de varios tipos, destacando por su impulso los grandes y medianos labradores de mesetas y valles de la España interior y mediterránea: Cuenca del Duero, Valle del Ebro, Valle del Guadalquivir, Levante, Murcia y Almería, entre otros. Pero esta historia triunfal, esta saga de labradores convertidos en *farmers*, o en *kulaks* a los que el destino histórico evitó la suerte de enfrentarse con un régimen totalitario al modo soviético (6), tiene sus límites.

Los problemas de crecimiento de la agricultura española de estos últimos años proceden tanto de la demanda como de la oferta. La demanda ha evolucionado primando consumos de productos ganaderos y hortofrutícolas, reflejando la tendencia conocida hacia la alteración de las estructuras del consumo alimentario como efecto de los aumentos de niveles de renta. La oferta ha tratado de seguir la demanda a través de la expansión de superficies irrigadas, la intensificación de la producción, los cambios de cultivo y de especies correspondientes. Ahora bien, las cuentas de explotación de los agricultores han debido absorber unos costes cada vez más altos, de varios tipos. Los salarios, por supuesto, aunque su peso es cada vez menor, debido a la sustitución enor-



me de mano de obra por maquinaria. Esta maquinaria, los recursos energéticos, las semillas y los piensos (en amplísima proporción, importados) requieren gastos de explotación crecientes. Una manera de reducir este crecimiento de costes podría consistir en ampliar la dimensión de la explotación. Pero el mercado de tierras ha funcionado de tal modo que la oferta ha sido escasa, y los precios extremadamente altos. El mercado de capital, que podría facilitar créditos para esa inversión en tierras, se ha ido sobrecargando por el esfuerzo de capitalización de la agricultura, contribuyendo a su endeudamiento, no alarmante, si se compara con el de otros países europeos, pero sí cada vez mayor. La vía de los arriendos ha estado y está semibloqueada a causa de una ley protectora de los arrendatarios.

Ante la dificultad de mejorar los resultados de la explotación vía reducción de costes, los agricultores han tendido a una estrategia de aumento de producciones físicas y aumento de precios.

Aparte concesiones retóricas a la llamada política de estructuras, las políticas agrarias han estimulado a los agricultores en esa dirección. Ahora bien, esta dirección choca cada vez más con dos límites. En primer lugar, el límite de la futura expansión de la demanda. A base de incrementar indefinidamente la oferta, se corre el riesgo de producir excedentes que ningún mercado, interior o exterior, vaya a absorber. Esta amenaza no se plantea por igual para todos los cultivos y regiones, pero sí planea sobre una gran parte de la oferta agraria española: porque el conjunto de la población está ya sobrealimentada (en términos estrictos de necesidades nutricionales y energéticas), porque los mercados

europeos no están lejos del punto de saturación para nuestra oferta (en competición creciente con la de otros países). Sólo cabrían reajustes de oferta (por ejemplo, la expansión del maíz, o la cebada, y el intento de introducir la soja), que requieren tiempo y recursos (económicos, y de investigación aplicada). En segundo lugar, el límite al crecimiento de los precios impuesto por la resistencia de otros grupos sociales, que se refleja en la vigilancia del gobierno sobre el componente alimentario del índice de precios al consumidor.

En definitiva, las cuentas de explotación se encuentran con techos de creciente rigidez en el volumen de ventas, y suelos constantemente en alza de gastos de explotación, intereses y amortización del capital inmovilizado, con escaso margen de maniobra para redimensionar las explotaciones, dados los precios de la tierra y la rigidez del sistema de arriendos.

Los agricultores, por lo tanto, han conseguido acceder a la posición de agricultores modernos: éste ha sido su gran triunfo. Ahora tienen que soportar la carga o el destino de tantos agricultores modernos europeos, con su cortejo de amenazas y fantasmas: de reducción de beneficios y rentas de la tierra, y de endeudamiento; y su coro de imprecaciones y demandas: de paridad de rentas y regulación de mercados (7).

### **3. Las nuevas reglas de juego de la acción colectiva**

Los agricultores se enfrentan con esas dificultades típicamente de dos maneras. En primer lugar, bajo forma de acción individual y directa en los distintos mercados. Esta es la acción económica por

autonomasia. Pero también pueden comprometerse, en segundo lugar, en distintas variedades de acción colectiva, a través de las cuales tratan de controlar, o regular, estos mercados.

Hay variedades de acción colectiva que se sitúan en la esfera de relaciones de la sociedad civil. Tales son las llevadas a cabo por asociaciones cooperativas, o asociaciones profesionales agrarias. Queda, por fin, el conjunto de acciones típicamente políticas (por ejemplo, de voto o acción partidista), por las cuales se trata de apoyar o rectificar una línea de política agraria, o de política en general. Por una u otra vía de acción colectiva, los agricultores intentan conseguir diferentes modelos deseables de organización de la economía agraria, con mayor o menor dosis de Estado, regulación corporativa o profesional, y mercado.

Ahora bien, estos agricultores, como ya se ha señalado antes, se enfrentan con esta situación, hoy, en un marco político y asociativo muy diferente del de apenas hace unos años. El régimen autoritario anterior permitió o alentó la adaptación de los agricultores a las nuevas circunstancias económicas. Pero, por otra parte, sólo permitió un limitado desarrollo de su potencial asociativo, y les colocó en una situación política deferente y subordinada, aunque, por supuesto, no sin influencia, sobre todo en el caso de determinados sectores. La democracia liberal, instaurada a partir de 1976-77, ha cambiado radicalmente las reglas del juego de la acción colectiva de los agricultores. Por dos vías. En primer lugar, por la vía de impulsar o estimular las organizaciones agrarias. En pocos años han surgido varias asociaciones de agricultores de ámbito nacional que se añaden a las de ámbito sectorial ya existen-



tes. Estas asociaciones tienen escasa afiliación, están divididas y ejercen una influencia global muy modesta. Con todo, están ahí, y cabe esperar que algunas de ellas arraiguen, lleguen a articular coordinadamente sus demandas (en el foro comunitario en su día y ante el gobierno ya hoy) y tengan un efecto.

El estímulo puede ser mayor o menor según cual sea la estrategia de la clase política al respecto. En este punto, durante los primeros años, ha habido un relativo consenso en la clase política en impulsar el desarrollo de las organizaciones profesionales agrarias (OPAS), vía su participación en pactos y arreglos corporativos. El modelo ha sido la pauta de pactos corporativos que, bajo diversos nombres y formas, se ha dado entre administración (a veces apoyando desde fuera), empresarios y sindicatos en los sectores de industria y servicios. De modo y por motivos semejantes se intentaron unos pactos agrarios, de vida más irregular. Por otra parte, las cámaras agrarias han quedado como terreno de competición electoral entre las OPAS. Con todo ello se asiste a un proceso donde, de un lado, el reto de las negociaciones de precios y, de otro, el reto de la competición electoral por el apoyo de sus bases potenciales, constituyen un test de eficacia y un test de legitimidad de las OPAS, que deberían estimular su desarrollo, o al menos el desarrollo de las mejores. Aunque también es posible que se disgreguen regional o sectorialmente por razón de las diferencias entre las políticas agrarias de las comunidades autónomas, y entre los intereses propios de los diferentes cultivos.

En segundo lugar, la clase política puede estimular el desarrollo de las OPAS por la vía de estable-

cer un sistema de intercambios de apoyo por satisfacción de demandas entre esa clase política, segmentada entre los diferentes partidos, y la clase labradora. Y téngase en cuenta que esas demandas a satisfacer, que formulan los labradores, no se reducen a demandas económicas, sino que incluyen demandas de carácter más general. Se ha constituido así un mercado político en pocos años, paralelo al mercado económico desarrollado en los últimos decenios.

## II. LA INVESTIGACION Y LA MUESTRA: SEIS AGRICULTURAS DINAMICAS

### 1. Supuestos orientadores

Este artículo trata de responder varias preguntas, formuladas a la vista de los problemas que acabo de exponer. En primer lugar, formularé esas preguntas, las justificaré y propondré las hipótesis de carácter más general y, por tanto, las expectativas más generales de respuesta. En segundo lugar, indicaré la estrategia de la investigación para la obtención de la evidencia empírica que permita dar respuesta a esas preguntas, y corroborar luego las hipótesis. El paso siguiente, y fundamental, será la exposición sustantiva y detallada de las hipótesis específicas y los datos empíricos, lo cual será el objeto de los siguientes apartados.

Mi argumento de orden más general es el siguiente. Espero que estos agricultores hayan realizado un considerable esfuerzo de inversión en tierras, riegos, cambio de cultivo y maquinaria, etc., con intensidades diferentes según las condiciones regionales. Dado el proceso de realizaciones, pero también de dificultades crecientes

de estos últimos años, espero, sin embargo, una combinación de arraigo, decisión, *momentum* de proyectos de inversión, junto con expectativas oscuras e incertidumbres. Doy por descontado, dada la cultura de la queja dominante en el mundo rural, juicios pesimistas sobre la rentabilidad actual de las explotaciones, pero doy margen, también, para un moderado optimismo cara al futuro.

Busco el tipo o modelo de organización de la economía agraria que estos agricultores consideran deseable. Caben tres tipos: de economía administrada, con protagonismo del Estado; de economía corporativa, mediante algún entendimiento entre el Estado y la profesión agraria, y de economía de mercado. Por supuesto, cabe esperar dosis de los tres tipos, pero la cuestión está en determinar el carácter determinante de uno u otro. Sabemos que, de hecho, la economía agraria depende enormemente de la intervención reguladora (y de las compras) del Estado. Dada esa dependencia, dadas las dificultades presentes, dado el desarrollo previsible del potencial asociativo de los labradores y dada la probable persistencia de las ideas tradicionales en el campo, cabe esperar la prevalencia de un modelo corporativo, o quizá corporatista-estadista, con un margen concedido al mercado (8). Resultará apasionante ver hasta qué punto estos agricultores modernos postulan un ideal de economía de mercado. En este punto cabe esperar importantes diferencias regionales.

He mencionado la expectativa de un desarrollo del potencial asociativo agrario. Me explicaré. Creo que el proceso de acumulación de recursos económicos es un aspecto de un proceso general de acumulación de recursos de todo ti-



po, que han llevado a cabo estos agricultores. Entre ellos, recursos sociales (y organizativos), y recursos culturales. Más tarde, también ha tenido lugar una acumulación de recursos políticos. Todos estos procesos de acumulación se han influido recíprocamente. Los cambios económicos han impulsado una demanda de educación económica y técnica; también han debido incrementar experiencias asociativas, permitir y requerir viajes, contactos con el exterior, etc. A la participación (tradicional entre estos labradores) en la vida política local, se han debido añadir, pues, las experiencias organizativas de cooperativas y, más tarde, de OPAS.

Espero también un tipo de identidad social que se encuentre entre un modelo de empresario agrario, y un modelo que llamaré de profesional (cuasi-profesional o proto-profesional) agrario. El hecho mismo de la indecisión de las OPAS, a la hora de definirse como profesionales o empresariales, es un indicio de la resistencia de los agricultores a considerarse empresarios. Pienso, en efecto, que cabe esperar de ellos un tipo de identidad más próximo al de los profesionales. La presentación de este modelo, y la elaboración de esta hipótesis, tendrá lugar más adelante.

La hipótesis, en todo caso, de esta prevalencia de una *identidad profesional*, es coherente con un *modelo de organización agraria de tipo corporatista*, y conecta con la hipótesis general de una *demanda de paridad de status* (típica de una profesión) que esta clase hace a la sociedad, y a la clase política. En mi explicación, las tres piezas forman parte de un todo. Esta demanda iría más allá de la mera demanda de paridad de rentas, y en cierto modo daría sentido o expli-

caría la carga emotiva y simbólica que subtiende esta demanda económica.

De todo esto se deduce, a su vez, la hipótesis general de una *relativa indeterminación de las posiciones políticas por los intereses económicos*. En contra de las expectativas típicas del marxismo o el neomarxismo de carácter instrumental o funcional, creo que existe un grado crucial de desconexión entre intereses y votos. Iguales (o casi iguales) intereses desembocan en votos completamente diferentes dentro de la misma clase labradora.

Recapitulo, pues, mi supuesto orientador básico. Caben dos expectativas típicas. En primer lugar, cabe imaginar que al término del proceso de cambio o modernización agraria los agricultores (semi) tradicionales se convierten en «empresarios agrarios». Como tales: a) postulan en medida muy importante una economía de mercado; b) se identifican como empresarios; c) postulan una demanda general de paridad de rentas con otras categorías ocupacionales, y d) ajustan sus preferencias políticas a sus intereses económicos.

Pues bien, creo que ese mismo proceso de transformación y modernización, en condiciones similares a las españolas, da pie para esperar que tales agricultores tiendan a convertirse, al menos durante un tiempo relativamente amplio, en «profesionales agrarios». Como tales: a) postulan una economía regulada o intervenida por el Estado y la profesión agraria; b) se identifican con arreglo a un modelo implícito próximo al modelo profesional; c) operan *vis a vis* el resto de la sociedad y la clase política, no según la lógica estricta de la demanda de paridad de rentas o ingresos económicos, sino de una demanda más amplia de paridad

de *status*, y d) hacen compatibles sus intereses económicos con preferencias políticas muy diferentes, elegidas, en última instancia, según otros criterios (incluyendo en primer lugar los criterios según los cuales articulan sus demandas de *status*).

Nótese que mi expectativa no consiste en esperar que todos los agricultores se comporten según ese modelo, sino que lo hagan con una frecuencia significativamente alta. La prevalencia, en su caso, de este modelo es compatible con la presencia, secundaria y subordinada, del modelo empresarial. (Quedando para una investigación ulterior, en particular a través del análisis de las diferencias por grupos de edad, examinar la tendencia previsible, al alza o al descenso, de cada uno de estos modelos. Queda también analizar el impacto diferente de uno y otro modelo entre los diferentes estratos dentro de la clase labradora).

## 2. Estrategia de la investigación; la muestra

Dados estos problemas y estas preguntas, interesa centrar la atención en el *core* de agricultores que se supone han tenido una respuesta adaptativa con éxito al reto de los cambios económicos de los últimos años. Esto obliga a una doble discriminación, por regiones y por estratos.

Por regiones, esto implica la exclusión de la cornisa cantábrica, la agricultura de montaña, y la agricultura de secano semiárida del interior. De hecho, se han seleccionado las seis agriculturas de Cuenca del Duero, Rioja/Navarra, Lérida, Levante, Almería y Baja Andalucía, por motivos que se detallan más adelante. Se han seleccio-



nado, a su vez, dentro de estas regiones, determinadas comarcas, y en ellas se ha orientado la investigación hacia agricultura irrigada, excepto en Cuenca del Duero y Baja Andalucía, donde también se ha tenido muy en cuenta el secano (y sólo secundariamente en Rioja/Navarra y Lérida). El conjunto agregado de las provincias correspondientes tiene peso importante en la economía agraria del país. Tomando solamente las seis provincias principales, su producción final agraria era aproximadamente el 20 por 100 del total del país en 1979.

En Cuenca del Duero (y concretamente en las provincias de Valladolid, Palencia y algunas comarcas de León) se han seleccionado comarcas representativas de una región que, como tal, produce cerca del 30 por 100 del trigo, el 40 por 100 de la cebada y el 50 por 100 de la remolacha del país, habiendo doblado sus regadíos entre 1970 y 1977 (0,4 millones de hectáreas), y duplicado, en general, su rendimiento, tanto en secano como en regadío en ese período (9).

Rioja y Navarra están orientadas hacia riegos intensivos de producciones hortofrutícolas, cuyo peso en la producción nacional es extraordinariamente alto (sólo Navarra produce el 50 por 100 de los espárragos del país, por ejemplo), destinados en buena parte a transformación (las dos provincias tienen el 25 por 100 de la industria de jugos y conservas vegetales en España) y a la exportación (los productos hortofrutícolas son el segundo renglón de nuestra exportación), por no mencionar la importancia del vino de Rioja.

Lérida es la tercera provincia agraria española, y está orientada hacia frutos de gran calidad (casi el 30 por 100 de la producción nacional de manzanas y peras), ade-

más de producción ganadera intensiva.

Valencia (Levante) es por sí sola la primera provincia de España por su producción agraria (cerca del 5 por 100 del total); casi monopoliza los agríos (en naranja produce un 82 por 100), que es el renglón más importante de las exportaciones agrarias, y aporta el 22 por 100 de la producción nacional de hortalizas.

Almería es una provincia con un crecimiento económico agrario vertiginoso en los últimos años (su renta agraria se ha multiplicado por catorce entre 1969 y 1979), gracias a la aplicación de una nueva tecnología, y su orientación hacia el comercio exterior de cosechas extratempranas (su producción de tomate representa el 20 por 100 de la del país) (10).

En Andalucía se han seleccionado comarcas de las provincias de Sevilla (la segunda provincia agraria del país) y Cádiz que, juntamente con Córdoba, se extienden por una superficie de 3,5 millones de hectáreas, que producen el 11 por 100 del total nacional, y constituyen una región que ha multiplicado sus riegos y diversificado su producción extraordinariamente en los últimos años.

Por estratos, se ha hecho una doble exclusión. Por arriba, de sociedades capitalistas anónimas y de terratenientes de varios miles de hectáreas. Por abajo, de agricultores pequeños, siempre en trance de convertirse en agricultores marginales. El objeto de la investigación son agricultores grandes y medianos. Como tales se han caracterizado aquellos que, por ejemplo, en la Cuenca del Duero, pueden tener más de diez hectáreas de riego (o más de 50 hectáreas de secano). En esa región el límite entre medianos y grandes, se ha fi-

jado convencionalmente en las 30 hectáreas de riego. (Dentro de los estratos de medianos y grandes, a su vez, se han distinguido hasta un total de cinco categorías). Estos intervalos han sido adaptados a las diferentes regiones según diversos criterios y tras discusiones con expertos locales o incluso tras elaborar algunas contabilidades de explotación *in situ*. Las estimaciones o equivalencias son sólo aproximadas. Baste decir que considero el límite inferior de este grupo de grandes y medianos agricultores el constituido por quienes tienen el límite ya mencionado de diez hectáreas de riego en Cuenca del Duero, Lérida y Baja Andalucía, pero, en cambio, tienen cinco hectáreas de riego en Rioja/Navarra; 1,5 hectáreas de riego en Valencia, o una hectárea de invernadero en Almería.

Diseñada la muestra con un tamaño de c. 620 (613) individuos, repartidos entre seis regiones, se seleccionaron las provincias y comarcas y, dentro de ellas, los pueblos y unidades de población (hasta un total de 195). Siguiendo un procedimiento aleatorio, y teniendo en cuenta los diferentes estratos económicos, se seleccionaron los entrevistados (11).

Habida cuenta de estas características de la muestra, entiendo que los resultados son generalizables al conjunto de los agricultores con similares características de las regiones en cuestión. No cabe, sin embargo, extremar la precisión en estas materias, dada la imprecisión de nuestras estadísticas y conocimientos sobre los mapas económico-agrarios de las regiones españolas, aunque me parece razonable extender las conclusiones al conjunto de la agricultura más dinámica de la España interior y mediterránea.

De todas formas, teniendo tam-



bién en cuenta la variación de las condiciones de todo tipo entre las diferentes agriculturas, la investigación mantiene en su punto de mira precisamente esa diferencia. Exploro varias alternativas de interpretación y agregación parcial de estas regiones, que no son las mismas cuando se refieren a la economía, la cultura o la vida política.

Ahora bien, además del interés en sí de esta población de agricultores dinámicos, propongo que se considere a esta población como el centro de gravedad en la estrategia de desarrollo de la agricultura española y el cambio de la sociedad rural; que se la considere «central» en la economía, la sociedad, la cultura y la política rural. En este caso, podemos entender este estudio como el estudio de un *grupo límite*, que puede iluminar algunos rasgos importantes de grupos en situaciones periféricas o rezagadas (12).

Si centramos, pues, la atención en el *core* de agricultores que se supone han tenido una respuesta adaptativa, con éxito, al reto de los cambios económicos de los últimos diez años, podemos inferir, dentro de ciertos límites: a) de sus problemas, los problemas *más graves* de agricultores con menos éxito; b) de sus actitudes y estrategias, las actitudes y estrategias, en menor grado, apoyadas por menos recursos y con un retraso temporal, de gran parte de los otros agricultores (con resistencias al mercado probablemente mayores, hábitos asociativos probablemente más débiles, identidades profesionales formuladas en términos más tradicionales, implicaciones en la vida política menores).

Naturalmente, esto es sólo una propuesta y una hipótesis que puede y debe ser contrastada empíricamente, por ejemplo a través de

la investigación de pequeños agricultores. (Con este objetivo la investigación principal ha sido seguida por una investigación complementaria sobre una submuestra de c. 100 agricultores pequeños en las regiones de Cuenca del Duero, Rioja/Navarra, Lérida y Baja Andalucía, cuyos resultados serán discutidos en otro lugar).

### III. LA ECONOMIA: LOGROS PASADOS E INCERTIDUMBRES FUTURAS

#### 1. El esfuerzo inversor de los últimos años, y algunas notas marginales sobre la presentación que los labradores hacen del mismo

La estrategia económica de los agricultores ha tratado de conseguir resultados económicos atacando a la vez el doble frente de la demanda y de la oferta, aumentando producciones y reduciendo costes. Preguntados sobre a qué conceden en su estrategia mayor atención, el 50 por 100 mencionó en primer término los problemas de demanda. Sin embargo, a la hora de reconocer si como resultado de sus operaciones la explotación era o no rentable, el 59 por 100 dijo que no lo era, y, en este caso, preguntados a su vez por qué, dieron mayor peso a los problemas de coste (54 por 100) que a los de precios (30 por 100). ¿Cómo se interpreta este reparto y esta oscilación de los acentos entre los dos objetivos de la estrategia labradora? Probablemente no como una contradicción, sino como el reflejo de una secuencia típica por la cual se ha privilegiado, primero, la expansión de la producción, y, después,

se reconoce el relativo fracaso de esa estrategia por no haberse sabido o podido resolver el problema de costes. Pero observemos los datos.

De hecho, el esfuerzo inversor de estos agricultores ha sido enorme: en tierras, riegos, cambios de cultivos, especies, máquinas. Disponemos de dos indicaciones: una, relativa a la frecuencia de las inversiones realizadas en los últimos cinco años; otra, al volumen de algunas de esas inversiones (comparando su superficie total y sus superficies regadas, distribuciones de cultivos y censo de ganado hace diez años y en la actualidad, y fechando la antigüedad de la maquinaria). La estrategia inversora depende mucho de la suma de recursos disponibles y, por lo tanto, varía entre los diferentes estratos dentro de esta clase, entre muy grandes y medianos agricultores. Dejaré, sin embargo, esta cuestión por el momento al margen. Me centraré en los agregados, y en las variaciones por regiones.

Cuando se les pregunta por inversiones importantes realizadas en los últimos cinco años, el 43 por 100 de estos agricultores menciona inversiones en maquinaria, en torno al 20/25 por 100 inversiones en tierra, riego y cambios de cultivos, y no llegan a un 10 por 100 los que hablan de ganado. Por supuesto, bastantes de ellos hablan de más de una inversión.

Si se compara, por otra parte, las menciones de adquisiciones de tierra o de expansión de riegos, con lo que sabemos que ocurre en realidad, por los propios datos cifrados suministrados por los agricultores, se observa que, en conjunto, hay una correspondencia: al 24 por 100 de menciones corresponden incrementos superficiales e incrementos de riego del orden



del 15/17 por 100. Las variaciones regionales en estas menciones reflejan aproximadamente los hechos, con la notable excepción de Cuenca del Duero. Aquí se detecta lo que aventuro cabe interpretarse como un rasgo cultural típico del labrador castellano, al menos del castellano viejo. De hecho, su esfuerzo real es relativamente (por comparación a otras regiones) mayor que la manifestación o el reconocimiento de haber realizado este esfuerzo. Estamos ante un fenómeno de *understatement*, al menos con relación a las compras y el riego de tierras.

Las menciones relativas a la inversión en cambio de cultivos y ganadería, así como en maquinaria, corresponden *grosso modo* con las indicaciones fácticas con que contamos. Resalta el esfuerzo ganadero de Cuenca del Duero (Levante y Almería reconocen un esfuerzo inversor mucho menor en ganado y maquinaria). Pero, siempre en relación con la cultura castellana antes aludida, interesa observar el interés de estos agricultores en resaltar ese esfuerzo inversor de maquinaria. Lo menciona el 74 por 100 de ellos. ¿Refleja esto un esfuerzo comparativamente mayor? Tal vez sí, aunque no tengo base para asegurarlo con los datos disponibles. Pero llamo la atención sobre la posibilidad, por el momento meramente especulativa, de que haya un *overstatement* de lo percibido como fuente de dificultades y costos, que complementa el *understatement* de lo percibido como logro. Si, en el contexto de una presentación de sí mismo que es siempre una encuesta por entrevista, la obtención de tierras es un orgullo, y la maquinaria una mezcla de orgullo (sobre todo cara al pueblo) y de carga, es posible que, dada una orientación cultural tendente a rebajar los triunfos y a aumentar las dificultades, lo prime-

ro sea disminuido y lo segundo magnificado. Pero veamos lo que sabemos de las conductas efectivas; en primer lugar, la inversión en tierras, o más en general, la expansión superficial de la explotación: su volumen; su distribución entre secanos y regadíos; entre propiedades y arriendos.

Hace diez años estos agricultores tenían c. 9.000 hectáreas de riego; diez años después tenían 10.300: un incremento del 15 por 100. El incremento ha variado por regiones: ha sido menor entre andaluces y leridanos (incremento del 3,5 por 100), medio entre levantinos, riojanos/navarros y almerienses (11/18 por 100), enorme en Cuenca del Duero, donde se ha más que doblado en estos años (128 por 100). La superficie de secano (cerca de 30.000 hectáreas, concentradas sobre todo en las dos submuestras de Cuenca del Duero y Baja Andalucía), ha aumentado en torno al 18/20 por 100.

¿Cómo se ha distribuido esta ampliación de las explotaciones entre compras y arriendos? Fijémosnos en los riegos. Típicamente las explotaciones tienen nueve décimas partes de la superficie en propiedad (88 por 100 *versus* 12 por 100 en arriendo). Esta situación no se ha alterado en lo fundamental, aunque el aumento relativo de los arriendos (23 por 100) ha sido algo mayor que el de las compras (14 por 100).

A la hora de observar las diferencias de estrategias entre compras y arriendos, las variaciones regionales permiten explorar las dos hipótesis siguientes. La elección estratégica entre compras y arriendos puede verse afectada:

a) Primero, por la existencia de un modelo ideal de explotación en propiedad, vigente entre la clase la-

bradora. Ocurre, en efecto, que allí donde las superficies en propiedad son relativamente menores (en Cuenca del Duero, donde es el 75 por 100 de la explotación, y en Rioja/Navarra, donde es el 63 por 100) es donde se da una estrategia preferente de expansión por compra (en Cuenca del Duero un incremento del 139 por 100 *versus* 85 por 100, y lo mismo ocurre en secano, y en Rioja/Navarra 22 por 100 *versus* 14 por 100).

b) Segundo, por las características de los mercados de tierra. Y aquí ocurre también que los hechos parecen *prima facie* consistentes con esta hipótesis. Las investigaciones sobre mercados de tierra parecen indicar precios más altos en Almería que en Sevilla y en ésta que en Valladolid (13). Se sabe también que, de todos los agricultores de esta encuesta, sólo los de Levante ven con moderada satisfacción los precios y las condiciones de sus mercados de tierras.

Esos agricultores han realizado experimentos importantes en cambios de cultivo, con las inversiones y arreglos que llevan consigo. Si se compara la distribución de cultivos en riego hace diez años y hoy, los cambios afectan como mínimo a un 12 por 100 de la superficie. En Cuenca del Duero la remolacha ha caído de modo importante (del 41 al 32 por 100), a favor de cereal-pienso (c. 20 por 100 hoy), manteniéndose la alfalfa. La caída de la remolacha ha sido mucho menos pronunciada en la Baja Andalucía (c. 14 por 100 hoy) y Rioja/Navarra (2,8 por 100). La alfalfa ha aumentado ligeramente en Rioja/Navarra (c. 10 por 100 hoy), Lérida (14 por 100), e incluso Baja Andalucía (3 por 100). La expansión del cereal en el regadío castellano es excepcional: la tónica general es caer muy pronuncia-



damente en Lérida (de 48 a 38 por 100), y menos en Rioja/Navarra (hoy 29 por 100) y Baja Andalucía (sólo 2 por 100). Por otro lado, Rioja/Navarra (c. 25 por 100), Lérida (15 por 100) y Baja Andalucía (6 por 100) tienen superficies apreciables de maíz, que se han mantenido.

Los frutales han aumentado a casi el doble en general. Lérida ha ampliado del 17 al 29 por 100 de su superficie. En escala más pequeña los esfuerzos más importantes se han hecho en Baja Andalucía (hoy 8 por 100), Rioja/Navarra (5 por 100) y Levante (4 por 100). Leguminosas y sobre todo verduras han aumentado en Almería (donde las verduras cubren el 60 por 100 de la superficie, y donde su expansión se ha hecho a costa de la uva), Rioja/Navarra (verduras: 15 por 100) y Levante.

El caso de los cítricos varía por regiones. Han aumentado ligeramente en Almería. Han descendido claramente en Baja Andalucía (al 12 por 100) y en Levante, donde, sin embargo, con un 73 por 100, siguen siendo el cultivo principal. De todos modos, este descenso en la superficie puede haberse visto más que compensado por el esfuerzo de transformación varietal que ha tenido lugar durante estos últimos años (14). Por último, el algodón ha mantenido (o reforzado ligeramente) su posición preeminente en los regadíos de Baja Andalucía.

Si se compara la superficie de secano hace diez años y hoy, aproximadamente un 10 por 100 de la superficie ha cambiado de cultivos, sobre todo en Cuenca del Duero y Baja Andalucía. El rasgo principal ha sido un ligero descenso del cereal, que cubre la contracción de trigo y la expansión de la cebada y cereales-pienso. El girasol habría

caído en Cuenca del Duero, y aumentado en Baja Andalucía (17 por 100 de la superficie hoy). El olivo habría caído en Baja Andalucía (y Lérida); mientras que la viña habría aumentado en Rioja, y el almendro en Rioja/Navarra y Lérida.

## **2. Estrategias económicas individuales cara a los mercados de productos y factores de producción**

Estos agricultores orientan sus producciones hacia mercados de muy diferentes características, según la naturaleza de sus cultivos. Con relación a muchos de ellos el Estado juega un papel principal, bien como regulador de los precios (fijos o de garantía), bien como directo comprador del producto. Pero en esto las variaciones regionales son muy grandes. Si nos fijamos en el primer producto de estos labradores (y los resultados no varían sustancialmente si nos atenemos al conjunto de los tres primeros productos, excepto que aumenta ligeramente la parte que va al mercado libre), observamos variaciones grandes, pero casi siempre (la excepción es Almería), dentro de la tónica general de un peso enorme de los precios fijos o de garantía. Sólo en Almería la gran mayoría (83 por 100) envía su producto principal al mercado libre. En Levante un tercio lo envía al mercado regido por precios libres, y casi la mitad a otro con precios de garantía. Rioja/Navarra y Lérida ocupan la posición intermedia: en Lérida, el mercado libre es importante, pero también lo es el de precios fijos; en Rioja/Navarra, la mayor parte se orienta casi por mitades hacia mercados de precios de garantía y de precios libres. Finalmente, Baja Andalucía y Cuenca del Duero orientan sus produc-

tos principales hacia el mercado de precios fijos, o al menos regulados por el Estado (sobre todo Baja Andalucía).

Ahora bien, la dependencia del Estado no se limita a los precios, sino que se extiende a las compras. Partes muy considerables de la producción de la Cuenca del Duero y Baja Andalucía, Rioja/Navarra y Lérida son compradas por el Estado. Partes importantes de la producción en esas mismas regiones se comercializan a través de cooperativas (sobre todo en Baja Andalucía). Empresas transformadoras (conserveras, por ejemplo) mayoristas y minoristas absorben casi la totalidad de la producción de Levante y Almería; una parte sustancial de la de Lérida, Cuenca del Duero y Rioja/Navarra, y una parte mínima de la de Baja Andalucía (cuadro n.º 1).

Por razón de sus experiencias de mercado, se observan así tres tipos de agriculturas. Con mayor experiencia directa, Almería y Levante. Con una experiencia menor, amortiguada por la regulación estatal de los precios y las compras de Estado y cooperativas, la Cuenca del Duero y, sobre todo, Baja Andalucía. Entre unas y otras, en posición intermedia, Rioja/Navarra y Lérida.

Naturalmente, caben varias estrategias de acción colectiva para asegurar que estos mercados funcionen de modo que se obtengan mayores beneficios. Se puede intentar mejorar los precios fijados o garantizados por el Estado. Los agricultores lo han intentado de varias maneras. Una de ellas ha sido a través de las OPAS. Baste aquí decir que las tasas de afiliación a OPAS entre estos agricultores son relativamente grandes, y considerable el valor potencial que se atribuye a las mismas, aunque las juzgan por el momento ineficaces y



de poca confianza. Caso de no poder conseguir que el Estado fije los precios deseados, de aquí se siguen descontentos expresados por lo pronto en críticas al gobierno: críticas que en el terreno de la política de precios son unánimes.

Queda, en fin, el efecto a conseguir a través de las cooperativas. Se confía en ellas ante todo para mejorar los precios (y esto parece corroborado por los resultados de una investigación de Cruz Roche) (15). La afiliación es significativamente grande (el 55 por 100 son miembros, sobre todo en Rioja/Navarra y en Lérida; en mucha menor medida, en Almería). Su presencia es visible, a veces importante, pero no domina los mercados agrarios.

Por lo que se refiere a los mercados de los factores de producción, conviene ver por separado los de tierras, capitales y trabajo (aparte los de insumos agrarios, maquinaria, piensos, fertilizantes, etc., en los que no entraré). Sabemos que los agricultores han hecho un importante esfuerzo en

compras de tierras (en compras o en arriendos, según los casos). Las dificultades encontradas en este proceso deben reflejarse en las mencionadas hoy: salvo en Levante, hay un clamor general de escasez de tierras a precios considerados razonables. Una forma de obviar esta dificultad ha sido vía créditos. Estos agricultores parecen haber hecho amplio uso de la financiación externa: en torno a dos tercios de los agricultores han hecho inversiones de capital en los últimos cinco años (con la excepción de Levante, donde sólo el 30 por 100 ha acudido a la financiación exterior).

Ahora bien, como puede verse en el cuadro n.º 1, en las fuentes de esta financiación externa, el peso del Estado y las Cajas es importante. Independientemente del volumen, que no conocemos, se sabe por la encuesta que en torno al 68 por 100 de los agricultores inversores han obtenido créditos del Estado, otro porcentaje similar de las Cajas, y un 17 por 100 de la Banca. El crédito oficial parece te-

ner peso preponderante en Cuenca del Duero y Lérida (aunque también importa en ellas el peso de las Cajas); las Cajas predominan en Rioja/Navarra (sobre todo Cajas de Ahorros), y Almería (sobre todo Cajas Rurales). La importancia de créditos oficiales y Cajas se equilibra en Baja Andalucía. En Levante el menor recurso a créditos se nutre sobre todo del crédito oficial. La banca privada tiene importancia en Cuenca del Duero (y menor en Lérida y Baja Andalucía).

Por todos los indicios, Cuenca del Duero ha hecho un recurso al crédito mucho mayor que el resto, lo que parece confirmar lo que sabemos de su expansión de tierras y riegos, y lo que los agricultores dicen de su inversión en maquinaria. Bien por el hecho de recurrir menos al crédito en general (caso de Levante), bien por el de recurrir más a otras instituciones (las Cajas en el caso de Almería), Levante y Almería dependen menos del Estado para su captación de capital.

Las quejas sobre el mercado de

CUADRO N.º 1

REGIMEN DE PRECIOS, DESTINO DE LAS VENTAS Y FUENTES DE CREDITO DE LOS AGRICULTORES

	Régimen de precios en que venden el primer producto (%)			Destino de las ventas del primer producto (%)			Fuentes de Crédito (%)		
	Fijo	De garantía	Libre	Estado	Cooperativas	Empresarios industriales y comerciantes	Oficial	Cajas(*)	Banca privada
Cuenca del Duero	51	24	22	39	15	43	59	43	19
Rioja/Navarra . . . .	23	32	37	46	15	36	28	58	4
Lérida . . . . .	44	4	47	26	22	48	47	28	12
Levante . . . . .	—	44	35	—	12	85	8	3	—
Almería . . . . .	6	1	83	9	7	81	16	27	1
Baja Andalucía . . .	76	9	8	32	45	19	22	21	7
TOTAL . . . . .	36	20	36	26	21	51	31(1)	31(1)	8(1)

Fuente: Encuesta a Empresarios Agrarios (ESA-83). Fundación FIES.

(\*) de Ahorros y Rurales.

(1) Sobre el total de agricultores, no sobre el total de inversores.



capitales y la disponibilidad de créditos hoy son muy fuertes. Probablemente recogen el eco de quejas recurrentes del pasado próximo. Así se dice con casi unanimidad que los créditos son excesivamente caros y excesivamente cortos de tiempo. Se critica igualmente, de modo acerbo, la política de créditos del Ministerio de Agricultura de los últimos cinco años.

Finalmente, parece tónica general una escasa preocupación y atención por el problema de los costes de trabajo, excepto en Baja Andalucía (pero incluso aquí sin gran dramatismo). En los últimos diez años ha habido un 8 por 100 del descenso en la mano de obra permanente; probablemente el descenso fundamental tuvo lugar en el decenio anterior. Hoy día, el tema salarios no es mencionado entre las causas principales de la baja rentabilidad de la explotación (excepto en Baja Andalucía). De hecho, tampoco tienen los agricultores experiencia de negociación directa con los sindicatos obreros (19 por 100), salvo los agricultores andaluces (50 por 100). De esa falta de temor y de esta ausencia de experiencia directa, tal vez se deduce la mezcla de benevolencia e indiferencia con que los agricultores consideran a los sindicatos: piensan que su existencia es recomendable (65 por 100), pero que carecen de importancia (sólo el 34 por 100 les atribuye mucha influencia).

### 3. Balance, proyectos y expectativas futuras

A primera vista, el balance de los resultados económicos, según los agricultores, es muy negativo. Piensan que la explotación ha ido a menos en los últimos cinco años (la diferencia entre porcentajes de pesimistas y optimistas es de -13

puntos); y piensan que hoy día no es rentable (la diferencia aquí es también de -13 puntos). La explicación de esta baja rentabilidad no está, desde luego, en la demanda, que ha ido a más (+30 puntos), sino en la evolución de precios y, sobre todo, de costes.

Este balance crítico debe situarse, sin embargo, en el contexto de otros varios datos. Es, por lo pronto, compatible con el proceso de considerable acumulación de patrimonio (en tierras, riegos, máquinas, etc.) que ya hemos visto. Es también compatible con una elevación importante de niveles de consumo. En estos momentos, el 80 por 100 de los agricultores tiene coche (y de ellos un 15 por 100 dos o más coches); el 72 por 100 dispone de casa propia, y dispone de numerosos signos, tanto de confort material como de *status*, tales como televisión en color (60 por 100), nevera (98 por 100), lavadora (90 por 100), lavaplatos (18 por 100). Dispone, asimismo, de teléfono (52 por 100). Correlativamente con ello han hecho inversiones culturales importantes en la educación de los hijos.

Esa experiencia positiva de acumulación de recursos ha reforzado más lo que siempre tuvieron: un alto grado de arraigo y compromiso con su profesión de agricultores. Veremos este tema con más detalle más adelante; pero aquí baste señalar que el 70 por 100 no dejaría hoy la agricultura bajo ninguna circunstancia.

Su arraigo en la profesión se ve reforzado igualmente por su arraigo en el pueblo. El 90 por 100 no saldría del pueblo en que vive. Esta vinculación de los agricultores a la comunidad local es mayor que la de otros miembros de la misma. Ya se vio en la época de la grave emigración de los sesenta. Pero se observa también comparando sus

respuestas con las de una muestra de población rural en una encuesta de 1981, promovida por la Fundación FIES: en este caso ascendía al 33 por 100 el porcentaje de quienes estaban dispuestos a irse del pueblo (16). Por otro lado, sin duda, este arraigo de los agricultores está en relación con la percepción que ellos tienen del pueblo, del clima social del mismo, de su evolución reciente, de su política local. En conjunto, estos juicios son positivos: 78 por 100, 72 por 100 y 79 por 100, respectivamente.

Lo cierto es que el balance crítico no es óbice para una voluntad decidida de seguir en la agricultura y de seguir invirtiendo en ella. Preguntados sobre qué destino darían al excedente, caso de tenerlo, la respuesta es volcarlo en primer lugar en la explotación agraria (comprando tierras, modernizando la explotación). Más aún, preguntados por sus proyectos de inversión para los próximos cinco años, responden afirmativamente anticipando un nivel de inversión semejante, si se compara la frecuencia de las inversiones pasadas y de las proyectadas (y se hace, por tanto, abstracción del volumen de las mismas), al del pasado. Con estas reservas, la comparación sugiere que la estructura de estas inversiones, sin embargo, varía sensiblemente. Descenderían las inversiones en maquinaria. Parece que en esto los agricultores sienten estar tocando un techo. De hecho, un 46 por 100 piensa que su maquinaria actual está infrautilizada. Aumentaría, en cambio, la compra de tierras, y ello a pesar de los precios de la tierra, que se considerarían extremadamente caros. Se mantendría posiblemente el interés por el riego y el cambio de cultivos; aumentando también, claramente, el interés por el ganado.

Esta voluntad de invertir se mue-



ve en el marco de unas expectativas complejas. Por un lado, hay expectativas optimistas respecto a la demanda en los próximos cinco años. Un tercio piensa que, siguiendo la línea del pasado, irá a más y sólo un 14 por 100 espera su caída. A más largo plazo, la entrada en el Mercado Común, un tema al que dedican considerable atención, no suscita, en general, grave preocupación, sino más bien moderado optimismo.

Sin embargo, hay otras expectativas inmediatas respecto al mercado de tierras y de capitales, y las posibilidades, por tanto, de realizar los proyectos de inversión, donde las dificultades no parecen fácilmente superables. La preocupación sobre el precio de la tierra y los créditos es general. En cambio, las expectativas sobre la política agraria no parecen demasiado oscuras. Hay algo de ironía, sin embargo, en esta apreciación. Porque el argumento de los agricultores viene a ser éste: la política agraria de los últimos años es tan mala que difícilmente lo que venga puede ser peor.

El juicio negativo sobre la política anterior se detecta en dos tipos de juicios: primero, los juicios sobre las políticas agrarias específicas en los últimos años. Según esto, el 62 por 100 considera negativa la política del Ministerio de Agricultura de los últimos cinco años sobre el acceso a los créditos; el 89 por 100 considera negativa esta política respecto a los precios de los carburantes; el 78 por 100, la política de negociación de precios agrarios; el 61 por 100, la política de promoción a las exportaciones agrarias; el 58 por 100, el control de las exportaciones agrarias; el 59 por 100, el control de la calidad de los productos agrarios (con numerosas no respuestas a estas últimas preguntas). Segundo, la valoración

sobre la política general del ministerio. Sobre una escala de cero a diez se le otorga un valor de 2,3 puntos. En esas circunstancias, preguntados los agricultores si esperan que la política del futuro (es decir, entonces, del gobierno socialista) será mejor, igual o peor que la anterior, creen que será mejor el 43 por 100 (*versus* un 22 por 100 igual y un 18 por 100 peor).

La consecuencia última de la ponderación entre todas estas expectativas diversas, ese balance de rentabilidad (crítico) y de acumulación de recursos (positivo), y este compromiso moral con la profesión, es que los agricultores ven su futuro profesional en los próximos cinco años con moderado optimismo (60 por 100 vs. 37 por 100 con pesimismo). Su optimismo es menor (46 vs. 48 por 100) respecto al futuro del país.

Si se analizan los resultados región a región, y se compara el balance de la rentabilidad hoy (índice de la diferencia entre rentables y no rentables), la evolución de esta rentabilidad de estos años (índice de la diferencia entre «a más» y «a menos»), la evolución de la demanda (índice de la diferencia entre «creciente» y «decreciente») y el grado de preocupación por los costes (índice de la diferencia entre «atribuciones a los precios de la mayor responsabilidad de la baja rentabilidad de la explotación» y «atribución a los costes»), se llega a la conclusión, lógica, de que allí donde la demanda ha ido a más y la preocupación por costes es menor, el resultado parece más positivo. Pero lo que esto significa para las diversas regiones es lo siguiente. En Baja Andalucía (donde los precios están garantizados y los costes son relativamente bajos) los resultados son bastante superiores al resto. En Levante, los agricultores hacen un balance lige-

ramente positivo (su demanda evoluciona ligeramente al alza, y su preocupación por los costes es pequeña), y en Lérida y Rioja/Navarra lo hacen ligeramente negativo (con demanda al alza, pero preocupación por costes considerable).

Los peores resultados se dan en Cuenca del Duero, con una demanda favorable, pero con una preocupación por costes muy alta (influyendo probablemente en esta preocupación de los agricultores las compras masivas de tierra, los arriendo altos y el problema de la infrautilización de la maquinaria), y en Almería, con un alza muy moderada de la demanda y una preocupación por costes muy alta.

Aun cuando Cuenca del Duero y Almería tienen una sensación de dificultad mayor que las otras regiones, participan en los sentimientos unánimes de arraigo en la profesión (algo menor en la de Almería), y la comunidad local (algo menor en los pueblos grandes de Baja Andalucía y Levante). Todos, también, tienen un nivel relativamente alto, semejante al del pasado, de proyectos de inversión, pero, de modo consistente con el hecho de arrojar un balance algo más positivo que el resto, sólo los agricultores de Baja Andalucía y Levante tienen más proyectos de adquisición de tierras que el resto, y de reducir menos que los demás los proyectos de compra de maquinaria.

Al examinar el futuro, la actitud con la que los agricultores se enfrentan a él, es necesario relacionar esta actitud con el conjunto de factores a los que cabe atribuir una influencia sobre la misma. Tales factores son la tendencia pasada, la expectativa de la demanda futura, la expectativa ante la integración en el Mercado Común, la expectativa ante la política de futuro y las expectativas de futuro en ge-



neral del país. Estos factores pueden compensarse unos con otros, hasta cierto punto. En el caso que nos ocupa, resalta ante todo el pesimismo de Cuenca del Duero: en él inciden la tendencia pasada, pero también expectativas oscuras con relación al Mercado Común, la política agraria y (por razones que desbordan las cuestiones económicas) el futuro del país. Todo ello más que compensa el optimismo con que se observa la evolución futura de la demanda (ver cuadro n.º 2). En el caso de Almería, el ligero pesimismo obedece también a cuestiones económicas (el peso de la dependencia exterior, matizado por la expectativa de demanda algo favorable y el considerable optimismo con relación al Mercado Común) y políticas (también hay aquí una preocupación, menor que en Cuenca del Duero, por el futuro de España, aunque no por la política agraria). Las otras regiones presentan al tiempo una tendencia pasada menos negativa, expectativas de demanda futura optimistas, expectativas moderadamente optimistas respecto al futuro de la política agraria y al futuro del país (excepto Rioja/Navarra).

#### IV. LOS MODELOS DESEABLES DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA AGRARIA: ESTADO, CORPORATISMO Y MERCADO

Sabemos la organización del mercado agrario vigente: una en la que la explotación agraria decide y realiza su actividad sometida a la doble influencia del Estado y del mercado, influencia que se reparte según sean los cultivos y las fases del proceso de producción y distribución. Intentando contrastar esta influencia, aparecen, con carácter secundario, organizaciones agrarias de varios tipos, que a su vez condicionan al agricultor individual. ¿Cuál es el modelo deseable desde el punto de vista de los agricultores? ¿Preferirían una organización en la que el Estado cobrara mayor relevancia, o el mercado, o las propias organizaciones profesionales? Teóricamente, el modelo puede incorporar mayores o menores dosis de estatismo, de corporatismo (entendiendo por tal un entendimiento o pacto entre el Estado y las corporaciones profesio-

sionales) y de economía de mercado.

Lo primero a señalar es la importancia del reconocimiento de la explotación individual o familiar como piedra angular de toda la organización. El ideal de la explotación familiar es compartido casi universalmente. Su deseabilidad es invocada por todos (incluidos, sea dicho aquí incidentalmente, los agricultores grandes, muy grandes). El 52 por 100 cree que su desaparición tendría terribles consecuencias. El 70 por 100 cree que el ideal de agricultura es una que se realiza en torno a explotaciones familiares (aunque sin precisar la dimensión de las mismas), a lo que cabría añadir un 17 por 100 que entiende ese ideal como combinando la explotación familiar con la gran empresa.

Ahora bien, supuesta esta opción inequívoca y fundamental por la agricultura privada o particular, por la propiedad privada de los medios de producción agrarios, ¿cómo se articula esto con Estado, corporaciones y mercado? Las respuestas indican que para estos agricultores el ideal de la agricultura está en un contexto estructu-

CUADRO N.º 2

#### EXPECTATIVAS DE FUTURO DE LOS AGRICULTORES

	<i>Evolución de la rentabilidad durante los últimos años</i>	<i>Expectativas ante la demanda futura</i>	<i>Expectativas ante la integración en el Mercado Común</i>	<i>Expectativas ante la futura política agraria</i>	<i>Expectativas ante el futuro del país</i>	<i>Expectativas ante el futuro profesional</i>
Cuenca del Duero	- 3,1	2,8	- 1,2	0,4	- 2,4	- 1,0
Rioja/Navarra	- 0,7	1,1	2,5	3,9	- 1,8	2,5
Lérida	- 1,9	2,0	2,6	2,2	2,0	4,6
Levante	0,3	1,7	4,3	1,7	0,1	3,4
Almería	- 3,7	1,4	3,3	3,3	- 1,0	- 0,1
Baja Andalucía	0,7	3,4	2,8	3,7	1,2	3,8
TOTAL	- 1,3	1,8	2,2	2,5	- 0,2	2,3

Fuente: ESA - 83.



ral no de mercado libre, sino de mercado ampliamente regulado e intervenido por el Estado, de acuerdo con los agricultores. Quieren reformas de la situación actual, pero no en la dirección de una generalización de la liberalización de los mercados de *inputs* y *outputs* agrarios. Quieren mayor eficiencia en el Estado, y mayor flexibilidad en el Estado: lo que supone sustitución de precios fijos por precios de garantía, y mayor participación de las OPAS. En general, desean un desarrollo del potencial asociativo agrario.

La importancia atribuida en principio al Estado se expresa de múltiples modos: por ejemplo, preguntados qué es lo más importante para el futuro de la agricultura, un 72 por 100 contesta que ese futuro depende sobre todo de una buena planificación. Todas las regiones dan respuestas semejantes, con la significativa excepción de Levante (donde el porcentaje desciende al 49 por 100). Se critica ciertamente la política agraria del gobierno, como hemos visto. Un 89 por 100 critica también la desatención relativa del gobierno hacia la agricultura, en comparación con la que concede a la industria y los servicios. Un 81 por 100 lamenta lo que en parte parece una consecuencia de ello: el retraso de la agricultura, su papel de pariente pobre, con relación a los otros sectores. Pero este sentimiento no hace sino exaltar, al parecer, el ideal de una intervención mayor y mejor.

Buena prueba de ello se obtiene al contrastar la situación actual y la situación ideal respecto a la comercialización del producto principal de los agricultores (cuadro n.º 3). Una tras otra todas las regiones contestan postulando el ideal de la regulación de precios, aunque por comparación a la situación

actual incrementan sensiblemente la importancia que conceden a los precios de garantía (a costa de los precios fijos). Pero lo cierto es que el 74 por 100 quiere ver su producto principal operando en un mercado de precios fijos o de garantía.

Tenemos, pues, un ideal de regulación estatal bastante generalizado. Levante es la excepción, con una mayor importancia dada al mercado, y mínima a los precios fijos; aunque debe observarse que el grueso de sus preferencias va hacia los precios de garantía. Rioja/Navarra y Lérida participan en menor medida de ese interés por los precios fijos. Esa diferencia parece corresponderse con la mayor o menor experiencia de los agricultores de las diferentes regiones con los mercados libres; la excepción de Almería a este respecto pudiera interpretarse como un resultado de factores adicionales: las especiales dificultades económicas en que se encuentra, y la ausencia de una tradición agraria.

Pero un matiz muy importante a añadir, que obliga a rectificar la conclusión de estatismo, es la

esperanza puesta, dentro de ciertos límites, en el asociacionismo agrario. En primer lugar, las cooperativas. Un 55 por 100 pertenece a cooperativas (bastantes más en Rioja/Navarra y Lérida, en torno al 65 por 100, y muchos menos en Almería: el 12 por 100). Aquí cabe añadir otro 14 por 100 que dice estar considerando la posibilidad de su incorporación. El nivel de satisfacción por el funcionamiento de las cooperativas es relativamente alto: un 72 por 100 de los miembros declara estar satisfecho. Además, se coloca a la cooperativa en primer lugar entre los instrumentos con los que se puede contar para conseguir mejores precios, e incluso para reducir costes. El potencial para su desarrollo parece evidente, con la sola (pero importante) reserva de sus dificultades intrínsecas (liderazgo y organización) y técnico-legislativas para su entrada en el terreno de la transformación de los productos agrarios.

En segundo lugar, las OPAS. Las OPAS en España son, por el momento, y tomadas en su conjunto (con notables excepciones sectoriales y regionales), débiles,

CUADRO N.º 3

REGIMEN DE PRECIOS DEL PRIMER PRODUCTO QUE CONSIDERAN IDEAL LOS AGRICULTORES

	Fijo (%)	De garantía (%)	Libre (%)
Cuenca del Duero .....	48	35	12
Rioja/Navarra .....	21	64	10
Lérida .....	38	38	13
Levante .....	9	48	22
Almería .....	46	28	11
Baja Andalucía .....	59	11	11
TOTAL .....	38 (30)*	36 (26)*	13 (36)*

Fuente: ESA - 83.

\* Las cifras entre paréntesis indican el régimen *real* de precios del primer producto y se incluyen a efectos de comparación con la distribución que perciben como *ideal*.



divididas e ineficientes. Sin embargo, la tasa de afiliación (no contrastada) de estos agricultores parece relativamente alta: en torno a un 38 por 100. Ciertamente que los juicios que se hacen sobre ellas en la actualidad son muy críticos. El 66 por 100 de los agricultores las consideran ineficientes; el 64 por 100 piensan que están manipuladas políticamente, y el 52 por 100 carecen de confianza en ellas. A pesar de todo, ocurre que las OPAS indican un ideal a alcanzar: el 67 por 100 entiende que es urgente y necesaria su consolidación.

Pero cabe ir más lejos y preguntarse por el papel ideal que estas OPAS deben cumplir en la organización de la agricultura. Se ha preguntado, pues, a los agricultores su acuerdo con las tres frases siguientes. Cada una de ellas apunta a un modelo distinto de la organización de la economía agraria, caracterizada por el intervencionismo estatal, el control por las corporaciones agrarias y el mercado libre. En rigor, las dos primeras no son incompatibles si el control de la corporación se lleva a cabo como control de, o en combinación con, el órgano estatal. He aquí las frases y las respuestas.

1) «Todos los productos agrarios sin excepción deberían estar protegidos e intervenidos por el FORPPA, como ya lo están los cereales y otros productos»: 64,1 por 100.

2) «Las organizaciones de agricultores deberían controlar muchas de las actividades e iniciativas que hoy controla el Estado»: 71,8 por 100.

3) «Lo mejor es que cada agricultor tenga la mayor libertad de movimientos posible, con el mínimo control, tanto del Estado como de las propias organizaciones de agricultores»: 35,2 por 100.

Los resultados corroboran la impresión que se deduce de las informaciones anteriores. El tema dominante es el de estatismo/corporatismo, aunque no cabe olvidar el 35 por 100 que insiste en la autonomía de los agricultores individuales, operando en el mercado. Levante confirma claramente su carácter diferencial: de agricultores orientados no sólo de hecho, sino ideal o normativamente hacia el mercado. A cierta distancia, en esta dirección, pudiera moverse Lérida. El resto se sitúa sólidamente en torno al ideal del estatismo corporatista (cuadro n.º 4).

Naturalmente, este ideal de estatismo corporatista, o de corporatismo a secas, parece perfectamente compatible con la aspiración a la entrada en un Mercado Común dominado por el entendimiento, desde luego cada vez más difícil, entre los estados y las corporaciones profesionales. Ello se combina con las, al parecer, estimulantes expectativas de demanda para los agricultores de Levante y Almería. El hecho es que el 73 por 100 de los agricultores se pronuncia a favor de la entrada en el Mercado Común (aunque el porcentaje desciende a 60 y 49 por 100, respectivamente, entre los agricultores de Cuenca del Duero y Baja Andalucía, que prevén mayores dificultades para sus productos).

Las variaciones en la importancia relativa de las OPAS en unas y otras regiones españolas pueden explicarse por referencia a la presencia o ausencia de otras organizaciones que estimularían su aparición. Estas organizaciones pueden ser un estímulo por razón de los problemas o las dificultades que plantean (los sindicatos obreros), o por razón de los apoyos o recursos que proporcionan (las cooperativas), o por alguna combinación

de los dos factores (el Estado). Típicamente, las organizaciones profesionales se han orientado hacia el trato con el Estado, intentando influir sobre él y conseguir su acreditación o reconocimiento; lógicamente serán más probables allí donde la actividad económica de los agricultores se encuentre más frecuentemente con el aparato estatal: hayan de contar con precios regulados, vendan al Estado, etc. Por otra parte, la aparición de este tipo de organizaciones, al menos en el terreno industrial, ha estado siempre estimulada por la aparición de un adversario, los sindicatos obreros, que ha intentado el control del mercado de trabajo (17). Ocurre, también, que la presencia de las cooperativas puede constituir un apoyo a las OPAS por varias vías, entre otras por la creación de un *stock* de hábitos asociativos y recursos de liderazgo y organización de que pueden beneficiarse las organizaciones profesionales agrarias. Abundando en esta misma idea cabe hacer, finalmente, la observación de que la probabilidad de las OPAS depende del carácter del medio social y profesional en el que puedan aparecer o desenvolverse, y, asimismo, de una cierta tradición (que reduce lógicamente los costes iniciales de constitución de la organización): esto primaría comunidades locales relativamente homogéneas y tradiciones familiares agrarias (ver cuadro n.º 5).

Las variaciones regionales de implantación de las OPAS corroboran aproximadamente todos estos supuestos o hipótesis generales. Así, ocurre que éstas aparecen o tienen mayor importancia allí donde se acumulan los efectos de la presencia de dos al menos de las organizaciones mencionadas: Estado, asociaciones cooperativas o sindicatos. En Rioja/Navarra, sobre todo, pero también en Lérida,



CUADRO N.º 4

## DISEÑOS DE ORGANIZACION DE LA AGRICULTURA

	Orientación hacia un diseño estatista (%)	Orientación hacia un diseño corporatista (%)	Orientación hacia un diseño de mercado libre (%)
Cuenca del Duero .....	58	82	9
Rioja/Navarra .....	77	82	27
Lérida .....	57	81	51
Levante .....	48	56	73
Almería .....	85	83	28
Baja Andalucía .....	61	52	25
TOTAL .....	64	71	35

Fuente: ESA - 83.

Cuenca del Duero y Baja Andalucía, tienen bastante importancia. Mucho menos la tienen en Levante, y parece que su importancia es mínima en Almería: aquí nos encontramos con una región menos afectada por el Estado, las cooperativas y los sindicatos, pero también con mucha menos tradición agraria.

## V. LA IDENTIDAD SOCIAL DE LOS AGRICULTORES: EL PROFESIONALISMO AGRARIO

### 1. ¿Empresarios o profesionales?

¿Cuál es la identidad social de los agricultores? ¿Entre qué tipos ideales se mueve; por qué; qué explica las variaciones regionales de esa identidad social, qué efectos tiene esta identidad sobre su estrategia individual en el mercado, sobre su acción colectiva, sobre sus relaciones con la clase política? Nótese que los efectos son, a mi entender, muy importantes. Parte im-

portante de su comportamiento económico, su valoración de la tierra, por ejemplo, o su sobreinversión en maquinaria, se entiende por la manera de definir los agricultores su propia identidad. Otro tanto ocurre con sus actividades políticas, que desbordan decisivamente la esfera estricta de sus intereses económicos, y dependen en medida considerable de lo que llamo su demanda de paridad de *status*.

La identidad social de los labradores difícilmente puede ofrecer rasgos precisos y claros. Esta clase ha experimentado una mutación enorme (económica, social, cultural y política) en los últimos diez a veinte años. En los años cincuenta el modelo del campesino medio podía ser caracterizado por: a) tecnología relativamente tradicional, e implicación general modesta en el mercado; b) vida social local; c) conducta deferente hacia un régimen autoritario, y d) cultura de particularismo familiar y de la honra, vinculada a cierto patriotismo o etnocentrismo local, ligado o reforzado (dentro de límites) por la religión tradicional.

En estos veinte años, este campesino se ha transformado en un *farmer* o agricultor moderno al que caracterizan: a) una saga económica impresionante de tecnología y de mercados; b) un marco o referencia de vida que desborda al pueblo, y un pueblo que muchas veces ha alterado su estructura, de modo que esa clase ha mejorado probablemente su posición dentro de su comunidad, y ha desarrollado su potencial asociativo; c) un juego político completamente diferente, con una competición partidista por su voto, y d) una invasión de cultura urbana de resultados muy poco estudiados, pero en todo caso con mensajes diferentes (incluidos, en parte, los religiosos).

Cabe ver esta evolución como tendente a la conversión del labrador medio en un empresario agrario. Su posición social sería, hoy como ayer, definida por su ocupación y su control (en propiedad o no) de los medios de producción. Pero, ¿le identifica esto a sus propios ojos como empresario? Que la duda es legítima es corroborado aparentemente por el hecho de que las propias organizaciones agrarias se llaman con frecuencia organizaciones profesionales agrarias. ¿Cuál es la diferencia entre identificarse de una u otra forma? ¿Cuáles, las consecuencias?

La identidad de «empresario» implica una actividad orientada hacia un mercado típicamente poco intervenido por el Estado, con la intención de conseguir un beneficio global que responde a una optimización en el uso de varios recursos de tierra, capital y trabajo, y, por implicación, una actitud instrumental y distanciada, una cultura utilitarista, respecto a tales recursos.

El tipo ideal de «profesional» implica características muy diferentes. El profesional se define tam-



CUADRO N.º 5

VOLUMEN DE AFILIACION DE LOS AGRICULTORES A LAS OPAS Y VARIABLES RELACIONADAS CON EL (Dependencia del Estado; experiencia de negociación con sindicatos y origen agrario)

	Afiliación OPAS (%)	Dependencia del Estado		Han negociado alguna vez con Sindicatos (%)	Son hijos de agricultores (%)
		Por su intervención en la fijación de precios(*) (%)	Por sus compras directas (%)		
Cuenca del Duero .....	37	75	39	14	71
Rioja/Navarra .....	67	62	46	13	96
Lérida .....	41	48	26	6	82
Levante .....	27	44	—	15	72
Almería .....	11	7	9	2	46
Baja Andalucía .....	39	85	32	50	41
TOTAL .....	40	56	26	19	68

Fuente: ESA - 83.  
(\*) Fijos, de garantía, de intervención.

bién por una ocupación y el control de algunos medios de producción, pero éstos son, en lo fundamental, capital o recursos simbólicos, un título o credencial, unos conocimientos. Aunque está orientado hacia el mercado, depende de modo crucial del Estado, que regula por ley el acceso a la profesión y, por tanto, garantiza el monopolio de oferta de servicios profesionales, en manos precisamente, de esa profesión. En el proceso de conseguir esta acreditación estatal, los profesionales se organizan corporativamente, a través de colegios o sus equivalentes. Por tanto, intentan el control del mercado a través de acuerdos entre su corporación y el Estado. Por supuesto, los profesionales, típicamente, dan importancia crucial en su motivación para la actividad profesional, y en su estrategia en la apropiación de recursos, al valor de honor, o *status*, y no sólo (aunque obviamente también), de beneficios monetarios. También ocurre, en conexión con ello, que tienen y presentan su actividad no como una actividad meramente in-

teresada en su propio provecho, sino también como un servicio: precisamente su demanda de *status* especial es el correlato a esta percepción de su actividad como servicio (18).

Pues bien, creo que la identidad del agricultor moderno es un híbrido entre la identidad de empresario y la de profesional. Un híbrido con variedades, más o menos cerca de uno y otro polo del espectro. En el caso de España la identidad del agricultor gana en claridad a efectos analíticos si la estudiamos *sobre todo* con referencia al tipo ideal del profesional. No llega a ser este tipo ideal en su totalidad, ciertamente. Lo que tenemos, por ahora, es una identidad profesional agraria limitada, con una variante empresarial algo más pronunciada en algunas regiones.

He aquí las características principales de ese profesionalismo agrario limitado (o cuasi profesionalismo, o protoprofesionalismo), que es como caracterizo la identidad social de la clase labradora.

*Primero.* Hay una atribución clara de valor muy importante, especial, a su ocupación, la agricultura, y al objeto inmediato de su ocupación y de su control, la tierra. Tienen, en efecto, una «filosofía agrarista». Agricultura, naturaleza y tierra tienen el valor de entidades básicas y fundamentos de la sociedad; y, por implicación, ellos participan de ese supremo valor. El valor puede extenderse a las virtudes morales del campo y de la vida local, frente a la inferioridad moral de la ciudad (un tema que ha resistido con cierto éxito la invasión de cultura urbana de la última generación). En las profesiones típicas, el valor simbólico está adscrito al capital de conocimientos. Aquí, se desplaza a la tierra, la naturaleza y la agricultura (y, por extensión, al pueblo).

Evidencia de esta filosofía agrarista puede encontrarse en una variedad de informaciones. Al carácter central atribuido a la explotación familiar, ya me he referido antes. Valoración especial del pueblo y sus tradiciones, en contraste con



la ciudad, se expresa, por ejemplo, en el desacuerdo del 77 por 100 con la frase «los habitantes de los pueblos deben seguir las costumbres y los modos de vida de la ciudad si quieren prosperar» y en el acuerdo del 83 por 100 con la frase «se debe tomar de la ciudad aquello que es positivo: los adelantos, las comodidades, etc. Pero el campo debe conservar sus tradiciones y su manera de pensar»; todo ello avalado por la decisión de los agricultores de permanecer en el pueblo, y su apreciación positiva del clima social del pueblo, su evolución y su política local.

Pero, más directa y específicamente, esta «filosofía agrarista» se pone de manifiesto en sus respuestas a una serie de preguntas orientadas precisamente a establecer un índice de agrarismo (19). Las preguntas se corresponden aproximadamente con el tema general de la valoración de la agricultura, la ocupación agrícola, la vida rural. La aplicación en este caso permite, además, la comparación del agrarismo de los agricultores españoles con el de los agricultores americanos.

Presento en el cuadro n.º 6 una serie de preguntas, junto con el índice (de 1 a 5) de agrarismo de las respuestas del conjunto de los agricultores, así como de una muestra de agricultores de Wisconsin (en 1965; tamaño medio de explotación 26/40 hectáreas; 303 individuos) y South Idaho (en 1974; tamaño medio 98 hectáreas; 71 individuos). Como se verá, el grado de agrarismo de las respuestas españolas, con variantes menores, es sensiblemente similar al de los agricultores americanos (20).

Pero hay un límite en esta valoración simbólica: que no es compartida por el resto de la sociedad. Típicamente, las profesiones han conseguido prestigios muy altos en

la sociedad; aún después de ímprobos y seculares esfuerzos (por ejemplo, en los Estados Unidos, el proceso de consolidación de la autoridad profesional médica sólo se alcanzó después de enormes esfuerzos entre 1850 y 1930) (21). El 91 por 100 de los labradores se sienten de hecho infravalorados por la sociedad.

Ahora bien, la diferencia entre los agricultores y los profesionales no está en el hecho presente de esa infravaloración por sí misma: al fin y al cabo los profesionales han conseguido ese prestigio, pero no aparecieron con él. La diferencia está en que agricultores y profesionales usan un recurso simbólico muy distinto en su estrategia de conseguir prestigio. Los profesionales usan sobre todo conocimientos racionales; los agricultores, el valor simbólico, supuestamente irracional, de la tierra. Dadas las condiciones de la sociedad moderna, el valor del primero promete aumentar con el tiempo; mientras que el valor del segundo está llamado a descender. Esta es la diferencia crucial; los agricultores lo saben. Su pesimismo relativo, y el límite al pleno desarrollo de una identidad profesional, radica en esa conciencia del futuro.

Los conocimientos técnicos que puedan obtener, al menos por el momento, aunque cada vez más valorados e importantes, son todavía un componente secundario de su valorización simbólica. Sin embargo, el reconocimiento cada vez mayor otorgado por los agricultores a los estudios, a los valores cognitivos de la racionalidad económica y científica, responde justamente no sólo al interés de su aplicación práctica, sino a esta estrategia global de valorización de *status*.

Ocurre así que el 72 por 100 de los agricultores selecciona la edu-

cación como el factor fundamental para conseguir llegar a un alto cargo, y el 77 por 100 estima altamente valiosa la investigación científica. Pero estas apreciaciones teóricas se reflejan en inversiones prácticas importantes en la educación. Sólo un 12 por 100 de los padres de los agricultores actuales tuvo estudios más allá de los estudios primarios, y un 11 por 100 fueron analfabetos. Pero hoy en día sólo un 1,4 por 100 de este grupo de agricultores es analfabeto y un 27 por 100 tiene estudios superiores a los primarios, incluyendo un 9 por 100 con estudios universitarios. Este porcentaje (el 27 por 100 de estudios superiores a los primarios), resulta similar al de los agricultores franceses de más de 50 hectáreas en 1967 (33 por 100) y de más de 100 hectáreas en 1965 (también 33 por 100), y superior al de los ingleses (en 1972, 18 por 100) (22).

Pero si el nivel de estudios ha subido drásticamente con relación a la generación anterior, aún va a subir más con el paso a la generación siguiente: en este momento el 33 por 100 de los hijos de los grandes agricultores, y el 20 por 100 de los del estrato de medianos, está ya o proyecta estar en la Universidad.

Ligado a esta valoración creciente del estudio, está el énfasis puesto en las tareas de dirección en la definición de la ocupación agraria (55 por 100), sobre las tareas de ejecución (42 por 100). Esta auto-percepción como director está, como sabemos, justificada por la complejidad de la explotación y de los procesos de cambio a que está sometida; pero también lo está por la aún modesta pero creciente formalización de sus métodos de control de la misma: el 25 por 100 de estos agricultores usa, en efecto, libros de contabilidad.



CUADRO N.º 6  
**ESCALA DE AGRARISMO (de 1 a 5) DE AGRICULTORES ESPAÑOLES Y NORTEAMERICANOS**

	<i>Cuenca Duero</i>	<i>Rioja/ Navarra</i>	<i>Lérida</i>	<i>Levante</i>	<i>Almería</i>	<i>Baja Andalucía</i>	<i>Total España</i>	<i>Idaho</i>	<i>Wisconsin</i>
a) La agricultura es la ocupación básica de nuestra sociedad y casi todas las otras ocupaciones dependen de ella .....	4,0	3,7	3,6	3,9	3,4	2,6	3,5	4,6	4,8
b) Una crisis en la agricultura puede causar probablemente una crisis al país entero .....	4,1	4,3	4,1	4,1	3,7	3,0	3,8	4,3	4,5
c) La agricultura supone trabajar con la naturaleza. Por eso es una ocupación más satisfactoria que otras .....	3,6	3,6	4,0	3,5	2,8	3,1	3,5	4	4,5
d) La culpa de que haya tanta delincuencia la tienen las grandes ciudades ..	3,4	3,5	3,4	3,7	3,9	2,4	3,3	3,4	3,4
e) La agricultura debería ser una ocupación en la que los agricultores fueran completamente independientes en las decisiones económicas .....	2,9	3,4	3,5	3,8	3,3	2,3	3,1	3,8	3,1
f) Un agricultor debe estar orgulloso si puede decir que no debe dinero a nadie .....	3,4	3,4	3,9	3,8	4,3	4,0	3,8	4	4
g) Los agricultores deben apreciar la agricultura como una buena forma de vida y deben preocuparse menos de los ingresos	1,8	2,2	2,8	2,3	1,6	1,8	2,1	2,1	2,1
h) Los agricultores deben desarrollar sus cultivos y explotaciones ganaderas todo lo posible mientras haya gente que pase hambre en el mundo ..	3,7	3,8	3,9	3,5	4,1	3,5	3,8	3,1	3,8
i) El desorden y la falta de autoridad son los mayores problemas que existen hoy en España (*) .	3,3	3,6	3,5	3,5	4,0	2,5	3,3	3,9	4
j) La sustitución de las explotaciones familiares por las grandes empresas agrícolas puede tener deseables consecuencias sociales y económicas .....	2,1	2,1	2,7	3,1	3,1	2,6	2,6	1,9	1,7
k) Si la situación económica de los agricultores continúa como hasta hoy, en pocos años las explotaciones familiares habrán sido desplazadas por grandes empresas agrícolas	3,8	3,7	2,7	3,3	4,1	3,4	3,5	3,7	3,8

Fuentes: ESA-83.

J.E. Carlson y M.E. McLeod, op. cit en nota 19. (\*) En el caso de Idaho y Wisconsin, en EE.UU.



*Segundo.* Hay también una idea moral de la ocupación de agricultor (en parte) como un servicio, y no sólo como una actividad económica orientada hacia un beneficio económico. La tierra, por ejemplo, debe ser respetada, y no simplemente instrumentalizada al efecto de hacerla productiva: el agricultor cumple, pues, una función social (y civilizadora) de cuidado de la tierra. Los agricultores, asimismo, prestan el servicio de satisfacer las necesidades alimentarias de la sociedad y, en último término, del mundo entero: la necesidad, el hambre, son enfatizados e incorporados explícitamente al sentido que tiene su actividad.

Por otra parte, el tema del servicio conecta con el de la vocación agraria: la llamada a realizar un servicio. Al explicitar los motivos de elegir o mantenerse en esta ocupación, se insiste en valores de autorrealización (gusto, satisfacción intrínseca), y de continuidad familiar. Preguntados por la razón de haber elegido el oficio de agricultor, el 44 por 100 menciona la afición o el gusto, y el 37 por 100 la tradición familiar: dos frecuentes motivaciones profesionales.

Pero merece atención también el hecho de que se rechace cualquier pretensión de reducir la agricultura a servicio, con olvido del interés económico: este idealismo retórico de las profesiones urbanas no cuadra con el realismo de los agricultores. La agricultura vive en y para el mercado, y ni lo oculta ni se lo oculta. Esta orientación (no lo olvidemos: tradicional) ha sido reforzada por la experiencia de estos años, e irá inexorablemente a más. Como va a más en todas las profesiones. Que encuentre un equilibrio con las ideas típicas de servicio o reduzca estas ideas a retórica superficial (lo que casi nunca ha sido), es una cuestión abierta.

*Tercero.* Hay una tendencia al autorreclutamiento o endorreclutamiento de la profesión agraria, que es sólo un eco algo lejano de la práctica del control de entrada de las profesiones típicas. Aún así, las similitudes no son desdeñables.

El autorreclutamiento agrario es familiar, es decir, adscriptivo y por vía de herencia; no supuestamente universalista, meritocrático o adquisitivo y por vía de exámenes. Este autorreclutamiento es alto: un 68 por 100 de los agricultores tiene padres agricultores (excluyendo obreros agrícolas). Esto dicho, queda que una y otra vía, adscriptiva o adquisitiva, persiguen en este caso lo mismo, un mecanismo de control de la entrada en la profesión, y la selección de gentes socializadas en los usos y valores de la misma. Otro sí que cada vez más hay un componente de *training* técnico y experiencia escolar que *de facto* operan como cuasi requisitos para la entrada en la profesión agraria. Sin olvidar los sueños (en algún país, tentativas) continuos de los agricultores por conseguir la exclusión legal de no agricultores del mercado de tierras, que sería el equivalente de la acreditación estatal por vía del título profesional. Hoy por hoy, sin embargo, la extensión del credencialismo al mercado de tierras parece tal vez imposible; pero no es imposible, desde luego, en forma de privilegios y apoyos especiales a jóvenes agricultores, etc.

*Cuarto.* La profesión tiene, como toda ocupación y clase social, una estrategia de *dual closure* (23). Es decir, su estrategia en la apropiación de recursos se dirige siempre contra grupos colocados en posiciones superiores o iguales (competidores) y contra grupos en posiciones inferiores.

Utiliza una ideología redistributiva frente a los primeros, y una ideología de defensa frente a los segundos. Lo típico de la profesión no es esta *dual closure*, sino la forma en que lleva adelante su estrategia. Típicamente lo hace a través de una asociación profesional o colegial, que a su vez trata de presionar y conseguir privilegios o tratos favorables del Estado.

Pero, obsérvese que, típicamente, estas asociaciones profesionales no se limitan a ser un medio para conseguir beneficios económicos para sus miembros, sino que se implican en la estrategia general de obtener *status* y conservar el honor de la profesión. De aquí que, lógicamente, se propongan a los miembros y sean frecuentemente vistas por éstos, como algo más que una asociación instrumental. Los valores de la garantía del honor o del *status* inducen a valorar a su vez la asociación *per se*, como una comunidad que reproduce y distribuye prestigio dentro de la profesión, lo que a su vez implica relaciones sociales entre sus gentes, sentimientos de identidad con la asociación, etc.

La afinidad entre profesionales y agricultores no puede ser en esto mayor. Los agricultores, como los profesionales, se orientan hacia un control estatista-corporatista del mercado y de esta forma tratan de conseguir: a) una redistribución de recursos a costa de fabricantes de insumos, importadores, empresarios agroindustriales, consumidores, etc., y b) una defensa frente a los obreros y sus sindicatos.

Y puede, o no, ocurrir también que consideren sus asociaciones con mayor o menor carácter instrumental. De hecho, la mayoría dice haberse afiliado a la asociación.



ción por acuerdo con sus fines o por un sentimiento de necesidad (58 por 100) frente a una minoría (32 por 100) que busca en primer término sus servicios, como contrapartida.

*Quinto.* Es normal también entre los profesionales que se consideren a sí mismos como parte de una sociedad no estructurada claramente en clases. Es obvio que las profesiones, como ya he dicho, tienen una estrategia compleja de apropiación de recursos a costa de otros grupos situados sobre, a nivel o por debajo de ellos; pero de ahí no se sigue una visión de la sociedad cuya estructura esté definida por las relaciones, y eventualmente el conflicto, entre dos o tres grandes clases sociales. Si se formula a los profesionales una pregunta sobre la sociedad en términos de clases, no contestarán viéndose a sí mismos como una clase profesional, sino como pertenecientes a un conjunto indefinido de fronteras borrosas de clases medias: en este caso, así lo ve el 51 por 100 de los agricultores, frente a un 27 por 100 que se define como perteneciente a una clase baja, trabajadora o pobre. Típicamente mencionarán tres (en este caso 49 por 100), cuatro o más (24 por 100) clases (frente a un 15 por 100 que menciona dos), y no concederán demasiada importancia a esta cuestión (46 *versus* 37 por 100 que sí lo considera importante). En otras palabras, su lectura de la estructura social no es «clásista»: no porque no haya clases, sino porque las clases no ocupan el lugar central y decisivo de la vida social.

Nótese que esta lectura no clásista de la sociedad, aún siendo habitual en las profesiones, no es un rasgo exclusivo o diferencial de ellas. La comparten con

otras muchas categorías sociales. En todo caso, como vemos aquí, la comparten con estos agricultores.

En conclusión, estamos ante un híbrido con rasgos dominantes de profesionalismo agrario; pero en el que caben variantes, y variantes que enfatizan el componente empresarial: a) con débil agrarismo o valoración simbólica de tierras, agricultura, etc.; b) enfatizando menos la cultura general o escolar; c) con menor insistencia en una demanda de paridad de *status* (con las implicaciones políticas de la misma); d) desenfatiando servicios, y enfatizando beneficios económicos; e) menos vinculados a linajes o tradiciones agrarias; f) sobreenfatizando el carácter instrumental de las asociaciones, y g) adoptando una visión relativamente clasista de la estructura social global.

Diversos rasgos de esta variante empresarial aparecen algo más pronunciados en Almería y Baja Andalucía, las cuales se distancian moderadamente del modelo profesional. En ellas el índice de agrarismo es más bajo, la importancia de los estudios es inferior (contrastando con la sobrevaloración de la educación en Cuenca del Duero), el énfasis en el beneficio económico es mayor, la tradición familiar agraria es menor, la lectura de la estructura social se acerca al modelo clasista.

## 2. La demanda de paridad de status

Las características complejas de la identidad agraria permiten entender lo que considero una demanda central de *status* dirigida al conjunto de la sociedad donde está, y específicamente a la clase política. La derivación de

una teoría de la demanda social de *status* de la hipótesis de la identidad profesional agraria no requiere aportación de nuevos datos, sino simplemente una breve reordenación de los datos ya existentes que han sido presentados anteriormente. Recordemos en efecto que: *Primero*, en la distribución de recursos (o, visto desde otra perspectiva, de recompensas) entre los diferentes sectores de la sociedad, esta clase se ve ocupando una posición media, central, próxima a la de la mayoría. Y ello tanto con relación a los recursos específicos de educación (65 por 100 se consideran con tantos o más recursos *versus* 29 por 100 que se consideran inferiores), ingresos económicos (56/38 por 100) e influencia política (48/38 por 100); como con relación al conjunto de los recursos disponibles (69/26 por 100) o la capacidad de disfrutar de las posibilidades que ofrece la vida (66/25 por 100) (24). En esta percepción participan todos los grupos regionales (con algunos matices secundarios), excepto Almería que adolece de un claro sentimiento de inferioridad. Esta excepción tal vez se deba a la convergencia de varios factores: las dificultades económicas ya mencionadas, la inferioridad objetiva de su nivel educativo, la lejanía de los centros de decisión política, incluidos los centros regionales, y probablemente su menor conciencia de «profesionalismo agrario» (en parte por menores raíces o tradiciones familiares agrarias).

*Segundo.* Este grupo ha realizado durante los últimos diez años un esfuerzo considerable de acumulación de recursos económicos, sociales, culturales y también de recursos estrictamente políticos (de voto y participación). Ahora bien, conviene observar que, desde nuestro punto de vis-



ta, toda esta acumulación de recursos se convierte en una acumulación de prestigio o de *status* de los agricultores a los ojos de la comunidad local. El significado o el sentido de toda esta acumulación de recursos, aparte de contribuir a la satisfacción de utilidades o aplicaciones prácticas, es el de realizar una estrategia de conservación y mejora del *status* del grupo. Esta hipótesis contribuye a explicar la carga emotiva y el «exceso» que se observa en determinados comportamientos económicos, como compras de tierras, o sobremecanización. Explica, también, y subyace, la estrategia de modernización de la propia casa, compra de coche (como, en general, todo tipo de máquinas) y estudios medios y superiores para los hijos y para las hijas.

*Tercero.* En parte como consecuencia de esta autopercepción de su estado presente y de esta experiencia de acumulación, y en parte como consecuencia de un sentimiento de dignidad u honra casi estamental que venía de antes, pero que ha sido reforzado por estas experiencias, esta clase tiene una alta valoración de sí misma, de la agricultura y de su modo de vida encarnado en la cultura del pueblo, es decir, tiene una filosofía agrarista y una alta autovaloración.

*Cuarto.* Ahora bien, existe una tensión o contradicción entre esta alta autovaloración y el escaso reconocimiento recibido por esta clase por parte del conjunto del sistema social, del resto de la sociedad. Aquí está la base para un sentimiento de agravio comparativo y de crítica por parte de los labradores. Aunque esta crítica contiene críticas específicas, arraiga en una crítica difusa de reivindicación de *status*.

Las críticas relativamente específicas se refieren: a) a la desatención del gobierno hacia la agricultura con relación a la industria y los servicios; b) al curso de los acontecimientos económicos, con una discriminación objetiva o estructural de la agricultura, y su retraso ante el desarrollo de otros sectores; c) a la valoración que la sociedad hace de los agricultores. Los agricultores, pues, se entienden desatendidos del gobierno, rezagados por la evolución de la economía e infravalorados por la sociedad.

*Quinto.* De aquí cabe deducir, lógicamente, una reivindicación difusa de paridad de *status* con el resto de la sociedad. Según esto, las reivindicaciones de paridad de precios o de rentas, que son tan cruciales y están tan cargadas emotivamente para los agricultores, lo son así porque vehiculan no sólo una reivindicación económica, sino también una demanda difusa y profunda de paridad de *status*. Pero nótese que esta demanda tiene, en realidad, como grupo de referencia, con el cual quieren alcanzar esta paridad, no la sociedad como tal (o la sociedad urbana), sino las clases medias a las que esta clase labradora se siente pertenecer.

En consecuencia, las demandas dirigidas por los labradores a la clase política estarían orientadas no sólo por el objetivo de conseguir políticas económicas concretas, sino por el objetivo de conseguir la defensa o la mejora de su *status* en la sociedad. De aquí su inclinación dominante hacia las políticas de «derechas». Porque lo que diferencia aquí, fundamentalmente, izquierda y derecha no es lo específico de la política económica, a este respecto. Cabe incluso que se juzgue durísimamente la política agraria

de la derecha, y se espere que la política socialista sea mejor, sin que esto se traduzca en un voto mayoritario de izquierda (aunque sí en un desplazamiento sensible, pero secundario).

## VI. LOS AGRICULTORES Y LA CLASE POLITICA

¿Cuál es la conducta política de la clase labradora? ¿Cuál es el contenido de su interacción con la clase política? Este contenido consiste en: el interés que los agricultores tienen en la actividad de esta clase; su participación, es decir, la frecuencia con que secundan o a veces estimulan la actividad de esta clase; los sentimientos políticos por los cuales articulan de modo muy genérico sus preferencias por estilos políticos, tal como ello se refleja en una abanico de izquierda a derecha; las opiniones políticas por las cuales expresan preferencias por un contenido político concreto; el voto, es decir, la inversión y el reparto de sus recursos políticos entre unos y otros segmentos de la clase política.

Comenzaré por señalar que la participación de los agricultores en la vida política es relativamente muy alta. No puede extrañarnos habida cuenta de su intensa experiencia de acumulación de recursos en general, su nivel educativo, y su nivel de información general. Por todo ello, es lógico esperar que hayan decidido usar los recursos puestos a su disposición por la democracia liberal en España. Los hechos, repito, indican un grado relativamente alto de lo que Barnes (y otros) llaman participación política convencional (25). Como tal se entiende el conjunto de actividades siguien-



tes: leer sobre política (con frecuencia el 67 por 100), discutir de política (69 por 100), convencer amigos para votar (23 por 100), trabajar sobre un problema local (58 por 100), asistir a un mitin (39 por 100), ponerse en contacto con los políticos (38 por 100), trabajar por un candidato o un partido (11 por 100).

Que esta frecuencia sea relativamente alta se demuestra comparando el índice medio de participación convencional que resulta de combinar todas aquellas respuestas en una escala de 1 a 8 (cuadro n.º 7). Los agricultores españoles tienen una media de 2,9, que es muy superior al conjunto de España (en 1980: 2,2, y en 1978: 2,5), así como incluso a muestras generales de países occidentales. El índice de los agricultores, muy superior al español medio, superaría al italiano y al inglés (2,6), así como al holandés y al austríaco (2,7), siendo semejante al de los países escandinavos (2,8/3) y sólo claramente inferior al americano (3,6). Se acusan diferencias regionales entre regiones de participación más alta (Baja Andalucía, Cuenca del Duero y Lérida, con 3,4/3,2) media (Levante y Rioja/Navarra, con 2,9/2,6) y muy baja (Almería, con 1,9).

En una escala de izquierda a derecha, de 1 a 7, este grupo de agricultores se sitúan en 4,13, es decir, prácticamente en el centro de la escala con una ligera inclinación al centro derecha. Contrastan con la posición más a la derecha de los agricultores franceses en 1978: 4,52 (26). Se observan, por otra parte, diferencias regionales: los más extremos (Almería, con un 3,7, y Levante, con un 4,5) son congruentes con el voto político efectivo. Los que oscilan en torno a la media, con di-

ferencias menores, no son congruentes, sin embargo, con el voto: los agricultores de Baja Andalucía, por ejemplo, votan en general más a la izquierda que los de otras regiones, pero su índice es de 4,27, casi idéntico al de la Cuenca del Duero (un 4,29), que tiene una orientación de voto completamente diferente.

Dejando aparte los temas de política agraria, ya discutidos (y sobre los que existe una considerable unanimidad), se ha preguntado a estos agricultores por un conjunto de temas políticos. A juzgar por sus respuestas, estos agricultores:

a) Eluden la aprobación total (8 por 100) o la desaprobación total de Franco (16 por 100), y prefieren situarse en la zona media de quienes creen que lo hizo bastante bien (23 por 100), actuó mediocrementemente, pero sin cometer errores importantes (22 por 100) o cometió errores importantes (19 por 100); si bien es cierto que en conjunto las críticas (35 por 100) superan ligeramente las defensas (31 por 100).

b) Se inclinan por creer que los sindicatos son demasiado débiles (31 por 100) más bien que demasiado fuertes (18 por 100), con un 30 por 100 sin respuesta.

c) Se desinteresan de la política de pactos sociales entre administración, empresas y sindicatos: el 65 por 100 dice no interesarse o no responde.

d) Dudan si la administración ha mejorado (35 por 100) o está igual que antes (31 por 100), con una minoría que cree ha ido a peor (19 por 100).

e) Aceptan las autonomías (47 por 100), aunque una minoría las rechaza (24 por 100) y otra no responde (28 por 100).

f) Consideran con desinterés o sin opinión (48 por 100) la perspectiva de la política económica de un gobierno socialista, con dos minorías cuasi equilibradas de optimistas (29 por 100) y pesimistas (22 por 100).

g) Se orientan más bien en contra de la entrada de España en la OTAN (40 por 100 *versus* 22 por 100), aunque más de un tercio (36 por 100) no se pronuncia.

Habida cuenta de las ofertas políticas e ideológicas en la España del momento, las posiciones de estos agricultores son congruentes con su autopostramiento en una escala de izquierda a derecha, aproximadamente en el centro. Es obvio, sin embargo, que ello responde a una opinión matizada y discriminada, según los diversos temas, aunque también con considerables dudas y confesiones de ignorancia o desinterés.

En cuanto al voto político (cuadro n.º 8), sabemos los resultados de las elecciones nacionales de 1979 y 1982. Entre uno y otro año el conjunto del centro y de la derecha bajó del 66 al 60 por 100, con el trasvase espectacular de UCD a AP que se observó en el conjunto del país. Ese trasvase, sin embargo, no impidió el crecimiento del partido socialista: el conjunto de voto socialista subió diez puntos, hasta el 33 por 100. La izquierda comunista y la extrema izquierda descendieron ligeramente, hasta ocupar una posición muy marginal, con un 5 por 100. Obsérvese, de todas formas, que el voto de estos agricultores en 1982 es casi idéntico al de la población agraria francesa en 1981: 60 por 100 a la derecha (32 por 100 a RPR y 28 por 100 a UDF), 32 por 100 al Partido Socialista y 6 por 100 al Partido Comunista (27).



CUADRO N.º 7

**ESCALA DE PARTICIPACION POLITICA CONVENCIONAL DE AGRICULTORES ESPAÑOLES Y DE POBLACIONES DE ESPAÑA Y OTROS PAISES OCCIDENTALES (de 1 a 8)**

Agricultores españoles:	
— Cuenca Duero .....	3,3
— Rioja-Navarra .....	2,6
— Lérida .....	3,2
— Levante .....	2,9
— Almería .....	1,9
— Baja Andalucía .....	3,4
— TOTAL .....	2,9
España (1980) .....	2,2
España (1978) .....	2,5
Otros países:	
— Gran Bretaña .....	2,6
— Dinamarca .....	3,0
— Holanda .....	2,7
— Austria .....	2,7
— Estados Unidos .....	3,6
— Italia .....	2,6

Fuente: — ESA - 83.  
— S. H. Barnes, López Pina, Op. cit. en nota 25.

Pero este mapa agregado (60 por 100 de centro y derecha; un tercio de votos socialistas y un 5 por 100 de votos comunistas y de extrema izquierda) cubre enormes variedades regionales. El centro y la derecha prevalecen en Cuenca del Duero, Rioja/Navarra, Lérida y Levante; pero no así en Baja Andalucía y Almería (aunque en esta región sí había prevalecido en 1979). Dentro del centro-derecha, el reparto de influencia entre unas y otras fuerzas varía mucho también de región a región: AP domina casi en solitario en Cuenca del Duero y Levante; UCD conserva gran importancia en Rioja/Navarra, y también en las provincias andaluzas; Convergencia i Unió es hegemónica en Lérida; Unión del Pueblo Navarro tiene peso considerable en Navarra.

Dentro de la izquierda, el PSOE recogió casi todo el sufragio, excepto en Baja Andalucía (con una importante proporción comunista, amén del Partido Socialista Andaluz).

Podemos comenzar intentando explicar este voto, como la manifestación más importante de la conducta política, por los intereses económicos. Esto sería un sencillo y sugestivo *test* para los neomarxistas. El resultado es negativo: porque la diferencia de intereses económicos y consiguientes demandas de política económica agraria no se corresponden con las diferencias en voto político. De hecho, los intereses son bastante similares; hay considerable consenso entre diferentes agricultores respecto al modelo

agrario a seguir, estatista-corporatista, con un margen al mercado libre. Por otra parte, hay escasa diferencia en el contenido programático de las políticas agrarias de los varios partidos (dejando aparte, claro es, la eficiencia probada o esperada, de difícil evaluación, de unos u otros). Sin embargo, la unanimidad se rompe al llegar el momento del voto político.

Tampoco la situación de mayor o menor dificultad económica afecta *per se* al contenido del voto. Almería y Cuenca del Duero votan en direcciones muy diferentes. Probablemente ese factor sólo tiene importancia en ausencia de otros factores correctores de carácter cultural que estabilizan el compromiso moral por una opción política. Esto supuesto, ese factor podría aumentar la inestabilidad o la volatilidad del voto, lo que contribuiría a explicar el caso de Almería (que en 1979 votó más al centro-derecha).

Si los intereses económicos *per se* no explican las diferencias, veamos si la referencia a los valores resulta más convincente. Conste, sea dicho incidentalmente, que la contraposición entre intereses y valores es relativa. Todo interés económico está culturalmente definido: es literalmente inconcebible fuera de un contexto de significados morales. En este sentido estricto, el interés implica dos componentes: un valor y una inversión motivacional, en última instancia emocional, que implica, a su vez, un compromiso práctico en la realización de ese valor. La importancia de los valores puede ser considerable. Muchos científicos sociales y observadores parecen ingenuos utilitaristas que desprecian el uso de los símbolos como irracionales o irrelevantes. Los políticos de ins-



CUADRO N.º 8

## VOTO POLITICO DE LOS AGRICULTORES

	Total 1979 (%)	Total 1982 (%)	Por regiones: 1982					Baja Andalucía (%)
			Cuenca Duero (%)	Rioja Navarra (%)	Lérida (%)	Levante (%)	Almería (%)	
Otros derecha .....	2	5	1	22	1	2	2	—
AP/CD .....	13	33	70	5	16	47	22	27
UCD (y CDS) .....	46	15	9	33	8	8	16	16
PNV/ER .....	5	7	—	—	49	—	—	—
Total Centro-Derecha ...	66	60	80	60	74	57	40	43
PSOE .....	21	32	17	33	19	41	60	29
PSA .....	2	1	—	—	—	—	—	9
Total voto socialista ...	23	33	17	33	19	41	60	38
PC .....	6	4	1	3	—	—	—	17
Resto Izquierda .....	1	1	—	—	5	—	—	—

Fuente: ESA - 83.

tinto o de oficio saben, por propia experiencia, la importancia de esas connotaciones retóricas de los mensajes políticos, es decir, la importancia de los factores simbólicos.

Cabe analizar dos complejos de causas o factores simbólicos: la demanda de paridad de *status* o reconocimiento social (conectada, a su vez, recordemos, con la prevalencia del modelo profesional) y la cultura religiosa.

De la demanda de paridad de *status* he hablado antes. Debo recordar, sin embargo, que el grupo de referencia al que se dirige esta demanda de paridad son las clases medias del país. Su conexión entonces con la conducta política parece clara. De aquella hipótesis o teoría se deduce que: tanto mayor la demanda de paridad de *status* (con esas clases medias), tanto mayor la orientación hacia la derecha, cuyas orientaciones ideológicas están a favor de una sociedad jerarquizada y no igualitaria. La disparidad

puede ser mayor, bien porque la autovaloración sea desproporcionadamente mayor (como ocurre por ejemplo en el caso de regiones con una fuerte identidad profesional agraria, tales como Cuenca del Duero, Rioja/Navarra, Lérida y Levante); bien porque los problemas y las dificultades objetivas sean desproporcionadamente mayores (como ocurre en Cuenca del Duero y, cabe añadir también, en Almería, pero aquí, como ya sabemos, la autovaloración es menor).

La demanda de *status* puede verse reforzada por la memoria histórica. Los labradores pueden comparar la clase política actual, por ejemplo, con la del pasado reciente. Tal vez Cuenca del Duero en su conjunto, por ejemplo, tuvo o creyó tener mayor influencia política, prestigio y apoyo económico en el régimen del general Franco que en la democracia. De hecho, Cuenca del Duero se caracteriza por juicios más positivos hacia el general Franco y,

por implicación, su régimen. Hay que tener también en cuenta su carácter contrario a la organización cuasi-federal del Estado, la cual supone una devaluación de los grupos sociales que se han percibido tradicionalmente más próximos al centro moral y político del país.

Otra de las implicaciones de esta hipótesis del énfasis en la demanda de *status* o reconocimiento social, es la importancia imputable a la estructura social local. Tanto más controvertido el *status* de estos labradores esté en el pueblo, por efecto compensatorio, mayor será su demanda de *status* a la clase política: tanto más estará a favor de una política menos igualitaria. Este factor empujaría hacia la derecha desproporcionadamente a los agricultores muy grandes de pueblos muy grandes, que no tienen control de la política local, y en donde el proletariado rural es muy importante y probablemente adversario: es decir, típicamente, los



la región catalano-levantina, y, por otra parte, las provincias andaluzas. Experiencias económicas diferentes reflejan la diversidad no sólo de paisajes agrarios y de cultivos, sino también de estilos de vida rural que son resultado de siglos de relación muy distinta de las tradiciones locales con las grandes instituciones unificadoras del país, el Estado, el mercado, la Iglesia y, más tarde, una cultura urbana secular.

Las tradiciones rurales locales han incorporado rasgos corporativos importantes en gran parte de España. El particularismo familiar ha tenido que adaptarse a costumbres colectivistas durante mucho tiempo, un fuerte sentido de identidad local, las reglas de la buena vecindad y una cultura de la honra que ha hecho de los campesinos gente sumamente atenta y dependiente de la opinión pública local. Unos modos igualitarios han expresado y expresan su estrategia de conformidad con esta opinión. Esas tradiciones locales han prevalecido en gran parte de la España que estamos considerando, pero no en toda ella. En los pueblos andaluces, por ejemplo, la vida social y la cultura han sido definidas por la relación triangular entre terratenientes, una capa intermedia de agricultores, empleados y profesionales, y el proletariado agrícola.

Por supuesto, Estado y mercado, iglesias y culturas seculares urbanas han tenido relaciones diversas de mayor o menor intensidad con estas culturas locales. El Estado y la Iglesia han pesado más sobre la España interior que sobre la España mediterránea; y el mercado (y quizá la cultura secular urbana) más sobre la España levantina que sobre el resto. De este modo, es posible propo-

ner el supuesto o la hipótesis de carácter orientador general (es decir, como punto de partida para investigaciones empíricas) siguiente. Es probable que la prevalencia del modelo profesional, con sus correlatos de diseño ideal corporatista de la agricultura, demanda de paridad de *status* y orientación de la conducta política, en buena medida, por referencia a valores pueda ser explicada como resultado de una adaptación a las condiciones y los retos de una economía capitalista avanzada, por parte de una población cuyas disposiciones han sido conformadas por una experiencia secular de mercados intervenidos y regulados por el Estado, y una vida moral pautada por la Iglesia y tradiciones locales con importantes rasgos corporativos. Un primer apoyo tentativo, de corroboración, de esta hipótesis orientadora viene dado por la prevalencia mayor del modelo de identidad profesional agraria en las regiones agraristas de Cuenca del Duero y Rioja/Navarra, así como, en menor medida, en Lérida y Levante, que en las provincias andaluzas.

Este trabajo encuentra su unidad analítica en torno a la contraposición entre los modelos profesional y empresarial, y constata la relativa prevalencia en este momento del modelo profesional. Pero quiero señalar que bajo ningún concepto considero que la evidencia presentada cierre la posible tendencia al desarrollo, a partir de aquí, de comportamientos y modos de conciencia, en estos agricultores, de «empresarios agrarios». En este trabajo cuido de presentar los límites inherentes a la plena realización por los agricultores del modelo profesional: los problemas planteados a la estrategia de valorización simbólica por el desarrollo de merca-

dos de tierras y por la incorporación continua de ciencia y tecnología a los procesos agrarios; por la coexistencia en el mismo diseño de organización de la agricultura de dosis variables de estatismo, corporatismo y mercado; por la debilidad de las organizaciones profesionales agrarias, y la ambivalencia actual de los agricultores hacia ellas; por el carácter intrínseco de las dificultades de los agricultores para desarrollar su interés por las cooperativas. Incluso, lógicamente, los temas de paridad de *status* y de diversificación del voto político pueden debilitar su conexión con el profesionalismo: en ello puede influir un factor que merece más atención, como la evolución del sistema de relaciones sociales locales e intraprofesionales.

Existen tendencias hacia el desarrollo de la competición en los mercados de producción, y tendencias para someterlos a control. Pero incluso estas estrategias de control pueden ser de naturaleza y de consecuencias diversas, de intervencionismo estatal en sus diferentes modalidades políticas, de agricultura contractual entre las grandes industrias agroalimentarias y los agricultores, de corporatismo protagonizado por organizaciones profesionales más o menos representativas e independientes. Lo más probable es que los nuevos agricultores tomen posiciones del modo habitual en el medio agrario, como se ha hecho siempre y como lo han hecho sus antepasados, es decir, no a través de grandes declaraciones de principio y con muchas palabras, sino con sus actos y a propósito de situaciones y de casos concretos. Y vayan definiendo así un estilo o un carácter más profesional o más empresarial, que se consolidará o no, según diversas circunstancias.



muy grandes agricultores andaluces, cuyo *status* en sus pueblos es especialmente controvertido.

Por último, cabe considerar, por derecho propio, la influencia de la cultura religiosa en la cultura política (cuadro n.º 9). Es lógico esperar que la cultura religiosa tenga un efecto enorme sobre el voto político. Históricamente la cultura religiosa católica ha sido construida y administrada por una clase eclesiástica que se estableció como una estructura de intermediación entre los agricultores y los poderes, tanto sobrenaturales como temporales. La clase política de derechas, desde hace más de un siglo, ha tenido grandes afinidades morales y ha establecido lazos continuos con la misma. La clase política de izquierdas, por el contrario, se ha caracterizado, y se caracteriza históricamente, por su relación de adversario o de competición con la clase eclesiástica.

No es probable que esta conexión histórica pueda considerarse modificada o anulada en el momento actual, como efecto del espectacular *aggiornamento* de la

Iglesia en los años 60. Ciertamente se ha producido mayor ambigüedad en torno a si el contenido manifiesto del mensaje moral de la clase eclesiástica, o de la Iglesia, es más afín a una sociedad jerarquizada o a una sociedad igualitaria; si bien tampoco esta ambigüedad es de hoy, aunque hoy se haya exacerbado. Pero las connotaciones históricas del mensaje moral de la Iglesia siguen siendo indisimulables. Su mensaje contextual ha sido siempre el de combinar una igualdad genérica de los hijos de Dios con una jerarquización firmísima entre los eclesiásticos y los laicos. Por esta vía, su efecto típico ha sido y es el de una consagración de los órdenes sociales jerarquizados, con un reparto diferencial del poder, la riqueza, la cultura y, desde luego, el prestigio y el respeto, con atribución preferente a las clases o estamentos colocados en la cúspide de las diferentes estructuras del sistema de estratificación, bajo la condición, a su vez, de un respeto recíproco a la Iglesia.

La influencia de la Iglesia sobre el conjunto de estos agricultores es, como se sabe, muy grande,

a juzgar por la frecuencia con que se definen como practicantes (51 por 100), sólo creyentes (34 por 100) o no creyentes (10 por 100). Por lo demás, su distribución es muy similar a la que hacen los propios agricultores franceses (en 1977: 51,39 y 7 por 100, respectivamente) (28). Pero esta influencia varía enormemente según las diferentes regiones. Y se confirma, comparando el voto político con la importancia de la Iglesia, que el peso de la Iglesia es, desde luego, mucho mayor en las regiones de derecha (y particularmente en las más de derecha, como Cuenca del Duero), y claramente inferior en las regiones de izquierda (como Baja Andalucía y Almería).

## V. CONCLUSION

La España agricultora que hemos analizado es, sobre todo, una España rural diversa. Sólo considerando estas seis regiones de la España interior y mediterránea cabe observar diferencias sistemáticas entre las zonas más agraristas de la España interior y

CUADRO N.º 9

### ACTITUD RELIGIOSA Y RELACIONES CON LA IGLESIA DE LOS AGRICULTORES

	Creyente practicante (%)	Creyente no practicante (%)	Tienen familiares religiosos (%)	Han estudiado en colegios religiosos (%)	Han pertenecido a asociaciones religiosas (%)
Cuenca del Duero .....	85	12	48	34	23
Rioja/Navarra .....	73	12	36	13	20
Lérida .....	42	42	27	33	15
Levante .....	44	38	11	16	26
Almería .....	34	55	10	12	12
Baja Andalucía .....	28	46	10	13	11
TOTAL .....	51	34	25	20	18

Fuente: ESA - 83.



Quiere ello decir que estos agricultores serán, en amplia medida, lo que quieran ser, y ello dependerá, a su vez, de cómo quieran definirse. De ninguna forma la ciencia social puede anticipar el contenido de esas decisiones, aunque sí puede determinar su probabilidad y las condiciones de posibilidad de su realización. Pero, dejando para otro lugar un ejercicio más preciso de predicción científica, y puesto en el trance de conjurar el futuro, me permitiré la libertad de terminar, un poco al modo antiguo, con una invocación.

Los nuevos agricultores españoles, medianos y grandes, aquí analizados, son, y serán por muchos años, la piedra angular de nuestra economía y de nuestros mercados agrarios, el soporte y el liderazgo de sus organizaciones profesionales, los interlocutores de las sucesivas administraciones, los garantes de la persistencia de unos modos de vida no marginales, sino capaces de resistir el paso del tiempo. No son, ni serán, los agentes de una modernización mimética o abstracta. En su diversidad, y en su mezcla de lucidez y cortedad de miras, de energía e incertidumbre, de robusto individualismo y capacidad sólo a medias actualizada de asociar esfuerzos, en su razonable desconfianza de la manipulación política, conservan la promesa de una aportación decisiva a una sociedad de hombres libres. Pero también, la posibilidad de una sociedad rígida y defensiva, solícita y agobiada de intervenciones y reglamentos, quejumbrosa y deferente de una nueva clase, hoy dispersa, de burócratas urbanos, propicios a planificarla y a equivocarla. Que Dios la guarde de sus protectores, y de sus propios deseos de ser protegida.



## NOTAS

(1) Por usar la expresión de Polanyi (Karl Polanyi, *The great transformation*, Boston, Beacon, 1957).

Quiero hacer constar aquí que este artículo se basa en los resultados de una encuesta entre empresarios agrarios (ESA-83), financiada y promovida por la Fundación FIES. El trabajo de campo fue realizado por CISE. Tuvo lugar durante los últimos meses de 1982, y los primeros meses de 1983. Agradezco a Gloria de la Fuente Blanco su colaboración en las tareas de preparación, coordinación y discusión de resultados de esta encuesta.

(2) La crisis de la agricultura tradicional comienza a discutirse sistemáticamente desde mediados de los años 60: ver Angel Rojo, «La crisis agrícola», *Información Comercial Española*, febrero 1965, y Víctor Pérez Díaz «Notas sobre el éxodo rural» (en ese número de ICE), y del mismo autor *Estructura social del campo y éxodo rural*, Madrid, Tecnos, primera edición 1966.

(3) V. Pérez Díaz, «Dynamisme, resultats et problemes actuels de l'agriculture espagnole», *Etudes Internationales*, vol. XII, 1, marzo 1981, págs. 117 y ss.

(4) V. Pérez Díaz, *Emigración y cambio social*, Barcelona, Ariel, 1971 (1.ª edición 1969).

(5) V. Pérez Díaz, *Estructura social del campo...*, op. cit.

(6) Sobre la evidencia documental de lo ocurrido con los *Kulaks*, véase la explotación del Archivo de Smolensko en M. Fainsod *Smolensko under Soviet rule*, Cambridge, Mass., Harvard U. P., 1958, págs. 238-264.

(7) Por ejemplo, los agricultores franceses: ver G. Wright, *Rural revolution in France*, Stanford, Cal.; Stanford U. P., 1964; M. Gervais, M. Jollivet, Y. Tavernier, *Histoire de la France rurale t. IV: de 1914 a nos jours*, París; Du Seuil, 1976; J. T. S. Keeler «The defense of small farmers in France», *Peasant Studies*, vol. 8, n.º 4 (1979).

(8) Los términos «corporativo» y «corporatista» tienen unas connotaciones diferentes en el lenguaje político o coloquial español (donde suelen tener una resonancia peyorativa, por razón de su asociación con el régimen ante-

rior) y en las discusiones de la sociología política contemporánea. Cfr., por ejemplo, en P. Schmitter-G. Lehbruch (eds.) *Trends Toward Corporatist Intermediations*, Contemporary Political Sociology, vol. 1, Sage, 1979.

(9) J. García Fernández, *Desarrollo y atonía en Castilla*, Barcelona, Ariel, 1981.

(10) Véase en este número de PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, el artículo de F. González Olivares y J. J. González Rodríguez, «Almería: el "milagro" de una agricultura intensiva».

(11) La muestra incluye 613 agricultores, 319 medianos y 294 grandes (en este último estrato, con una sobrerrepresentación en las submuestras de Cuenca del Duero y Baja Andalucía, para incluir «secanistas»). He aquí la distribución de la muestra por regiones: Cuenca del Duero, 101; Rioja/Navarra, 100; Lérida, 99; Levante (Valencia), 98; Almería, 88; Baja Andalucía, 127.

(12) La lógica de este diseño de investigación es similar a la utilizada por Goldthorpe y sus colaboradores en su exploración de la tesis del «aburguesamiento» de la clase obrera en Inglaterra (J. Goldthorpe et al., *The affluent worker in the class structure*, Cambridge, U. P., 1969, págs. 30 y ss.). Estos autores seleccionaron un caso lo más favorable posible para la confirmación de aquella tesis. En este trabajo se ha elegido una muestra relativamente favorable para la confirmación de la hipótesis de una transformación de los agricultores en empresarios agrarios. Si esto no se confirma en este caso, *a fortiori* será aún más improbable que ocurra para el conjunto de los agricultores del país. Ello permite, en todo caso, explorar la teoría alternativa del «profesionalismo» agrario.

(13) Ver el trabajo de Díaz Berenguer, Sumpsi y otros, sobre mercado de tierras en este número de PAPELES.

(14) Véase la entrevista con Julio de Miguel en este número de PAPELES.

(15) Cuyas conclusiones se recogen en P. Cruz Roche, «Empresas asociativas de transformación y comercialización de productos agrarios»; en este mismo número de PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA.

(16) José M. Plana, F. Alvira, *Encuesta de comunidades locales*, Fundación FIES, Madrid, 1981.

(17) Sobre la lógica del proceso de desarrollo de asociaciones empresariales en general, cfr. P. Schmitter y W. Streeck, «The organization of business interests», International Institut for Management, Wissenschaftszentrum, Berlin, 1981.

(18) El arquetipo profesional es el médico; cfr. E. Freidson *Profession of Medicine*, New York, Harper and Row, 1970; J. Berlant, *Profession and Monopoly*, Berkeley, U. of California, 1975, y con carácter más general M. S. Larson, *The rise of professionalism*, Berkeley, U. of California, 1977.

(19) Índice de agrarismo: cfr. J. E. Carlson y M. E. Mcleod, «A comparison of agrarianism in Washington, Idaho and Wisconsin», *Rural Sociology*, n.º 1, 1978.

(20) Resultados semejantes se han obtenido en otros estudios en Estados Unidos, *ibid.*

(21) P. Starr, *The social transformation of American Medicine*, New York, Basic Books, 1982, págs. 79 y ss.

(22) Cit. en C. Rebol «L'apprentissage familiale des metiers de l'agriculture» *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, n.º 39, 1981. Ver también H. Newby, *Green and Pleasant Land?: Social Change in Rural England*, Penguin Book, 1980.

(23) F. Parkin, *Marxism and class theory: A bourgeois critique*, London, Tavistock, 1979.

(24) Para un contraste con la autopercepción de los trabajadores industriales en España, ver V. Pérez Díaz, *Clase obrera, orden social y conciencia de clase*, Madrid, Fundación INI, 1980, págs. 54 y ss. y 101 y ss.

(25) Cfr. S. H. Barnes, M. Kaase, *Political action*, Beverly Hills, Sage, 1979; S. H. Barnes, A. López Pina, «Political mobilization in old and new Democracies», American Political Association, Annual Meeting, 1982.

(26) I. Boussard, «Le comportement électoral des agriculteurs françaises de 1973 à 1981», *Economie Rurale*, n.º 149, mayo-junio 1982.

(27) *Ibid.*

(28) Sofres, *L'opinion française en 1977*. Sofres. Paris. Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1978.